

**UNIVERSIDAD NACIONAL**

**PEDRO RUIZ GALLO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**



**TESIS**

**La estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de  
Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad  
penal.**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA  
EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

**Autora:**

**Abog. Lucía Mariana Armas Ventura.**

**Asesora:**

**Mag. Mary Isabel Colina Moreno.**

**Lambayeque, 2024.**

**La estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de  
Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad penal**



Abog. Armas Ventura Lucia Mariana  
Autor



Mag. Colina Moreno Mary Isabel  
Asesora

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz  
Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON  
MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

Aprobado por:



Dr. Hernández Rengifo Freddy Widmar  
Presidente del jurado



Dr. Anacleto Guerrero Victor Ruperto  
Secretario del jurado



Mag. Yzquierdo Hernández Leopoldo  
Vocal del jurado

Lambayeque, 2024




## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá verla información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Lucia Marian Armas Ventura  
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS  
Título de la entrega: "La estructura procesal del Código De Responsabilidad Pena...  
Nombre del archivo: Tesis\_LUCIA\_ARMAS\_VENTURA-EPG-UNPRG.docx  
Tamaño del archivo: 282K  
Total páginas: 121  
Total de palabras: 25,019  
Total de caracteres: 133,658  
Fecha de entrega: 21-nov.-2022 10:40a. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entre... 1960374655

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ  
GALLO  
ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN CIENCIAS  
CON MENCIÓN EN DERECHO PENAL



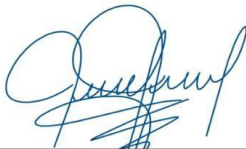
**TESIS**

"La estructura procesal del Código De Responsabilidad Penal De  
Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad  
penal"

Investigador:  
Bach. Armas Ventura Lucia Marian

Asesor:  
Mag. Colina Moreno Mary Isabel

Lambayeque, 2022



Abog. Mary I. Colina Moreno  
Asesor


# “La estructura procesal del Código De Responsabilidad Penal De Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad penal”

## INFORME DE ORIGINALIDAD

17%	17%	1%	7%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net	Fuente de Internet	4%
2	repositorio.unprg.edu.pe	Fuente de Internet	3%
3	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	Trabajo del estudiante	2%
4	indagaweb.minjus.gob.pe	Fuente de Internet	1%
5	es.scribd.com	Fuente de Internet	1%
6	scc.pj.gob.pe	Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unfv.edu.pe	Fuente de Internet	<1%
8	tesis.usat.edu.pe	Fuente de Internet	<1%


  
Abog. Mary I. Colina Moreno  
Asesor

### **Constancia de originalidad de aprobación de tesis.**

Yo, Mag. Mary Isabel Colina Moreno asesora de tesis, revisor del trabajo de investigación de la tesista Lucía Mariana Armas Ventura titulada: La estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad penal. Luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 17% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte de acuerdo a la Directiva para la evaluación de originalidad de los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Guías de uso del Software de reporte de similitud TURNITIN, aprobado mediante Resolución N° 659-2020-R, de fecha 8 de setiembre de 2020, razón por la cual la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 22 de noviembre de 2022.



**Mag. Mary Isabel Colina Moreno**

**Asesora**

Siendo las 12 m horas del día 10 de Febrero del año Dos Mil Veinticentro, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado, designados mediante Resolución N° 1204-2022-EPG de fecha 21 Noviembre 2022, conformado por:

Dr. FREDY WIDMAN HERNANDEZ RENGIFO PRESIDENTE (A)

Dr. VICTOR RUPEATO ANACLETO GUERRERO SECRETARIO (A)

Mg. LEOPOLDO IZQUIENDO HERNANDEZ VOCAL

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada "LA ESTRUCTURA PROCESAL DEL CODIGO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES FRENTE A LA VIOLACION DEL LIMITE DE RESPONSABILIDAD PENAL"

presentado por el (la) Tesisista LUCIA MARIA ALOMAR VARELA

sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 006-2024-EPG de fecha 23  
DE DICIEMBRE DE 2024

El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 17 puntos que equivale al calificativo de BUELO

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:  
MAESTRA EN DERECHO CON MENCION EN CIENCIAS PENALES

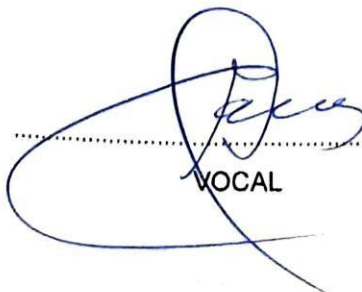
Siendo las 1:02 pm horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.



PRESIDENTE



SECRETARIO



VOCAL

ASESOR

## **DEDICATORIA**

**A**

***Dios:***

Por haberme dado la vida y permitirme haber llegado hasta este momento tan importante de mi formación profesional

Por darme salud para lograr mis sueños y objetivos, además de su infinito amor y misericordia.

**A        *mis        amados        padres:***

Por ser mis pilares de vida y el motor que impulsa mis sueños y esperanzas, quienes estuvieron siempre a mi lado en los días y noches más difíciles durante mis horas de preparación y estudio de la presente investigación. Les dedico este logro amados padres José Manuel y Paulina Consuelo, como una meta más conquistada.

Su amor, consejos, valores, motivación y ejemplo constante me han permitido ser una persona de bien.

***AUTORA***

## **AGRADECIMIENTO:**

A mis distinguidos maestros por sus sabios,  
precisos y rigurosos conocimientos. Gracias por su  
paciencia, dedicación y apoyo.

***AUTORA***



## ÍNDICE GENERAL

<b>Acta de Sustentación .....</b>	<b>iii</b>
<b>Constancia de originalidad de aprobación de tesis.....</b>	<b>iv</b>
Dedicatoria .....	v
Agradecimiento .....	vi
Índice General .....	vii
Índice de tablas.....	x
Índice de ilustraciones .....	xii
Índice de anexos .....	xiv
Resumen.....	xv
Abstract.....	xvi
Introducción .....	17
Capítulo I .....	22
Aspectos Metodológicos.....	22
1.1. Realidad Problemática.....	22
1.2. Formulación del Problema.....	27
1.3. Objetivos.....	27
1.3.1. Objetivo general .....	27
1.3.2. Objetivos específicos .....	27
1.4. Hipótesis .....	28
1.5. Variables.....	28
1.5.1. Variable independiente .....	28
1.5.2. Variable dependiente.....	28
1.6. Antecedentes de la Investigación.....	28
Capítulo II.....	32

Marco Teórico .....	32
Sub Capítulo I.....	32
1.1. El garantismo penal como límite de la responsabilidad penal.....	32
1.2. La observancia del principio de legalidad.....	38
Sub Capítulo II .....	42
El límite de responsabilidad penal de los menores .....	42
2.1. La capacidad civil de los menores de edad .....	43
2.2. La responsabilidad penal.....	46
2.3. La imputación penal y el límite de edad .....	52
Sub Capítulo III .....	58
El control social de la delincuencia juvenil .....	58
3.1. El control social y su vínculo con el derecho .....	58
3.2. El derecho penal como mecanismo de control social .....	60
3.3. La delincuencia juvenil y el control social.....	62
Capítulo III.....	67
Diseño Metodológico.....	67
3.1. Tipo de Investigación .....	67
3.2. Métodos de investigación .....	68
3.3. Diseño de contrastación.....	70
3.4. Población y Muestra .....	71
3.5. Técnicas de recolección de datos .....	71
Capítulo IV.....	73
Resultados y discusión .....	73
4.1. Resultados.....	73
4.1.1. Resultados del análisis de la estructura del código de	
responsabilidad penal de adolescentes .....	73
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos .....	75
4.2.....	93

4.3. Discusión de los resultados .....	94
4.3.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Estudiar la estructura del Código de Responsabilidad penal de adolescentes en razón de los principios garantistas”	94
4.3.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Describir las justificaciones jurídicas válidas para el establecimiento del límite de responsabilidad penal de los menores y los vicios que generan su vulneración”	98
4.3.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Evaluar los efectos de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes respecto del control social de la delincuencia juvenil” .....	101
4.3.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la necesidad de establecer una propuesta modificatoria de la estructura del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a fin de alcanzar un correcto control social de la delincuencia juvenil” .....	104
Conclusiones .....	109
Recomendaciones .....	112
Referencias Bibliográficas .....	113
Anexos .....	118

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Resultados obtenidos sobre la afirmación: La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor..... 76

Tabla 2: Resultados obtenidos sobre la afirmación: El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor ..... 79

Tabla 3: Resultados obtenidos sobre la afirmación: Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal aun cuando sólo se tratare de sanciones mínimas..... 82

Tabla 4: Resultados obtenidos sobre la afirmación: Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que intervienen en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios..... 85

Tabla 5: Resultados obtenidos de la afirmación: El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción ..... 88

Tabla 6: Resultados obtenidos de la afirmación: Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos .....	91
--	----

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor..... 77

Ilustración 2: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor..... 80

Ilustración 3: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal aun cuando sólo se tratare de sanciones mínimas..... 83

Ilustración 4: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que intervienen en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios..... 86

Ilustración 5: Porcentajes obtenidos de la afirmación: El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción..... 89

Ilustración 6: Porcentajes obtenidos de la afirmación: Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos ..... 92

## **ÍNDICE DE ANEXOS**

Anexo 1: Cuestionario de encuesta aplicada a los operadores jurídicos del Distrito Judicial de Lambayeque.....	118
---	-----



## **RESUMEN**

Esta investigación se ha proyectado en base a la condición especialísima que configura la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo cual se verifica como una incongruencia sistemática en tanto que no tiene el respaldo sustantivo en el ordenamiento jurídico penal, ello dado que la responsabilidad penal se exime en el caso de los menores de 18 años. Esto en tanto que la construcción del mencionado cuerpo legal sobre responsabilidad penal, considera una responsabilidad especial en su artículo primero.

Esta situación problemática se analiza en base a la aplicación de los métodos interpretativos de las reglas que en función al sistemático jurídico se ha podido verificar la incongruencia procesal con la base normativa del cuerpo legal sustantivo penal, demostrado además mediante la doctrina jurídica que convierte a este vínculo normativo como una exigencia para el adecuado desarrollo procesal.

De acuerdo a ello se ha logrado establecer como resultado de esta investigación la determinación de la incongruencia procesal que requiere de un acomodo del sistema penal en cuanto a la pauta de atribución de responsabilidad penal para el caso de menores de 18 años, lo cual se debe hacer mediante la incorporación de la responsabilidad especial señalando que se exceptúa tal inimputabilidad cuando el menor entre 14 y 18 años haya incurrido en ilícitos penales.

**Palabras clave:** Responsabilidad Penal, Adolescentes, Límite de responsabilidad penal

## **ABSTRACT**

This investigation has been projected based on the very special condition that configures the procedural structure of the Code of Criminal Responsibility for Adolescents, which is verified as a systematic inconsistency insofar as it does not have substantive support in the criminal legal system, given that the criminal responsibility are exempted in the case of those under 18 years of age. This, while the construction of the aforementioned legal body on criminal responsibility, considers a special responsibility in its first article.

This problematic situation is analyzed based on the application of the interpretive methods of the rules that, based on the legal system, have been able to verify the procedural inconsistency with the normative base of the criminal substantive legal body, also demonstrated through the legal doctrine that makes this regulatory link as a requirement for adequate procedural development.

Accordingly, it has been possible to establish as a result of this investigation the determination of the procedural inconsistency that requires an accommodation of the criminal system in terms of the pattern of attribution of criminal responsibility for the case of minors under 18 years of age, which must be to do by incorporating special responsibility, noting that such non-imputability is excepted when the minor between 14 and 18 years of age has incurred criminal offenses.

**Keywords: Criminal Responsibility, Adolescents, Limit of criminal responsibility**

## INTRODUCCIÓN

La preocupación académica en cuestión de protección de los menores siempre ha sido vasta y orientada a los intereses que incorporan los principios como lo son derechos relacionados a la vida, la libertad, dignidad y otros tantos que incorpora el interés superior del menor; en ese campo se ha considerado incursionar respecto al cuidado que corresponde al Estado resguardar sobre tales intereses; así pues bajo el entendido caso que se toman medidas adecuadas para tal fin, se experimenta legislativamente la creación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Lo cual como toda creación legislativa tiene un origen basado en los lineamientos de la política pública que asumen las gestiones de turno, la misma parten del reconocimiento de un problema en la realidad, para construir estrategias que permitan solucionarlo, el problema respecto a ello surge cuando se presentan influencias de tipo político e incluso mediático; para el caso de la regulación que se analiza, puede considerarse un origen atribuible a la presión social que se desencadena en razón del exceso de participación de adolescentes en actividades delictivas, lo cual genera malestar en la población y un nivel de insatisfacción de la acción del Estado para generar control.

La creación de las reglas requiere de una previa evaluación con el fin de advertir circunstancias de falta de coincidencia con otras reglas, o con el esquema del sistema jurídico que en tanto ordenamiento penal será preciso que se contemple la connotación de la secuencia de la imputación penal que se pretende atribuir a los adolescentes como si se tratara de sujetos dotados de capacidad absoluta, cuando en el ámbito de interpretación doctrinaria y en la propia legislación, aún se mantiene la

postura que solventa el diseño que los considera inimputables por ser menores de 18 años, controversia.

Esta descripción pone en tela de juicio la estructura procesal, puesto que esa es la naturaleza de la regla en cuestión, cuya base no se aprecia como un esquema que se condice con los principios que emanan del derecho penal general para constituirse como principios específicos del proceso penal, lo cual se entiende deben ser contemplados pese al acondicionamiento que con los acomodados realizados; tal característica no se percibe y debe ser analizada.

En base a esta descripción de las razones por las que se inspira la investigación y que permite ver la realidad problemática desde el punto de vista jurídico que se ha de observar en el desarrollo de esta, es que logra construirse una interrogante que hace las veces de formulación del problema y se plasma como sigue:

**¿De qué manera la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los menores?**

Dicha interrogante en tanto cuestionamiento de la situación procesal que aporta el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitió en su momento hacer un acercamiento a lo que pudiera comprenderse como respuesta a lo planteado y se constituye en la tesis de la siguiente manera: Si, la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los adolescentes en razón de la imposición de sanciones pese a su inimputabilidad; entonces, se requerirá modificar tal esquema bajo el respeto de los principios que inspiran los derechos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica.

Como se podrá apreciar en la estructura que se muestra de la hipótesis y la formulación del problema que tienen como elementos comunes en su composición, dos conceptos que bajo una relación de causa y efecto propician el razonamiento que inspira el sentido de la investigación; tales elementos son las variables de la investigación, los cuales de igual manera darán el carácter tanto a la meta principal de la investigación, así como a las tareas específicas que se traza esta tesis. En función de ello es que se incorporan contenidos teóricos y de observación de la realidad a este esquema de investigación.

De acuerdo al orden de los objetivos específicos se ha considerado en el primer capítulo la contemplación de aquellos aspectos de construcción metodológica que sirvieron de guía para el desarrollo de la tesis, partiendo de aquel detalle de la realidad que muestra la razón de ser del análisis temático que se ha ejecutado en función a la eficacia de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el mismo que no se presenta como la mejor opción para solucionar el problema. Luego de ello, se ha construido un esquema que va describiendo el planteamiento, las variables y los métodos que fueron aplicados para conseguir la determinación final a la que arriba esta tesis, respecto a la viabilidad del código en observación.

Es importante también indicar que en el segundo capítulo de la tesis, el desarrollo encuentra espacio para ejecutar el marco teórico, cuya construcción obedece a la marcación de metas plasmadas en los objetivos específicos, así en su contenido se ha incorporado la teoría referida a los principios rectores integrantes de la estructura sancionadora como proceso, ello con fines de percibir su influencia en

el contenido de la construcción procesal, generando principios de corte específico que permiten la correcta ejecución de la persecución penal como tal.

Tal circunstancia permitió establecer que el garantismo penal se comporta como un límite restrictivo a las labores que le corresponden al Estado para atribuir el grado de responsable que le puede ser reconocido a un determinado sujeto respecto de una acción delictiva, esto en función al ius puniendi, lo cual sirve de fuente para la determinación de la culpabilidad de los delitos y en función a ello la aplicación de sanciones; siendo así importó reconocer el hecho de que esta función corresponde ser aplicada en tanto se hayan pasado el filtro de otros límites a los cuales se debe prestar atención, como es el caso del que corresponde a la mínima intervención del Derecho Penal, que asegura la ejecución de acciones previas por parte del Estado para solucionar la problemática social, como es el caso de la responsabilización penal de los menores aún cuando su condición es de inimputables.

La estructura que concierne al capítulo tercero se ha ocupado de la recopilación de datos que permitieron establecer el sentido de la aplicación de la regla que se aprecia en el aspecto social y procesal de este tipo de casos sobre delincuencia juvenil, lo cual consolida la parte analítica del resultado de la investigación, referidos a la comprensión de la aplicación de los principios procesales que se recogen en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes; examen que es enriquecido con los datos estadísticos que inspiran la creación de esta política pública como estrategia para combatir la delincuencia juvenil, con ello se permite ver el verdadero efecto de este tipo de intervención de parte del Estado.

Es en base a ello que otra sección del marco teórico se aplica a la búsqueda de información doctrinaria dirigida a la comprensión adecuada del nivel de

responsabilidad penal que se contempla para con los adolescentes en el ordenamiento jurídico, por lo cual se tocan temas que tienen que ver con la capacidad civil en primer término para asumir cuál es la base jurídica que orienta el sentido de la imputación con relación al límite de edad que se contempla en el Código Penal; detalle que hace la diferencia para el sentido que opera sobre la intervención bajo un carácter mínimo que se basa en condición principista, dado que a ello se suma tal límite respecto a la incapacidad que restringe la imputación de los menores de edad; regla que tendría que cambiar con el fin de que se dote de operatividad procesal a la construcción del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

La evaluación de los contenidos que se han vertido en la estructura de la tesis se consolida mediante la parte final en la discusión de los resultados que muestra el análisis crítico de cada uno de los puntos que se han desarrollado en la investigación, así se tiene la evaluación de las dispersiones de cada planteamiento como meta de carácter particular, tal ejercicio ha conllevado a la determinación de posturas por cada uno de ellos, lo que implica un razonamiento directo de parte de la investigación y que permitió consolidar cada una de las conclusiones y las recomendaciones del caso.

La Autora.

## **CAPÍTULO I**

### **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

#### **1.1. Realidad Problemática.**

De acuerdo a las indicaciones metodológicas que se presentan como requisito para el desarrollo de las investigaciones de este tipo no experimental, que calzan en las que se refieren al análisis jurídico, se hace necesario describir la realidad problemática con el fin de marcar en primer lugar los aspectos que se constituyen como afectación y son la base o planteamiento del problema, para luego sintetizar esta circunstancia amplia, en un solo cuestionamiento que pasa a ser la formulación del problema.

El nivel de criminalidad en el Perú siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los distintos gobiernos por cuya responsabilidad ha pasado la necesidad de generar políticas criminales que busquen disminuir o erradicar circunstancias tan negativas.

Bajo el entendido caso que estas políticas siempre se originan en la identificación de los problemas que aquejan a la sociedad, es de fácil verificación que la realidad no siempre se percibida de manera adecuada por parte de la gestión que se ocupa del desarrollo de estas estrategias, así pues se ha de considerar la concurrencia de estereotipos en razón de la ausencia de datos informativos que sean fiables e independientes como característica, lo cual conduce a espacios de inseguridad, que se corrobora con la muestra estadística de cantidad de víctimas que se produce en la realidad (Zarate, Aragón, y Morel, 2013, p. 9).



Para el caso de la criminalidad y control importa el hecho de que las políticas que se diseñan tengan un correlato en la realidad y tal cual lo observa la investigación antes citada, no tendría esta característica esencial que permita la comprensión adecuada de la situación que corresponde a la seguridad ciudadana que se experimenta en un determinado Estado, para el caso del Perú será importante tener en cuenta además factores trascendentales que se relacionan con la situación de los menores de edad.

El cuidado de la seguridad ciudadana sin duda se pone en un sitio importante toda vez que resulta grave tener en el Perú ciudades tan grandes con niveles de delincuencia muy altos como es el caso de Lima, también se puede indicar que es el espacio geográfico delimitado en el país que presenta un alto índice de casos denunciados por la acción delictiva ello en tanto que la muestra indica 42,496 casos (41% del total), esta realidad también es posible ser apreciada en el ámbito geográfico lambayecano puesto que alcanza un índice de 6,657(6%), sumado a dichos resultados se encuentra también el caso de La Libertad, con 6,055(5%) (Diario Gestión, 2019).

Resulta pues de mucho interés, el hecho de que tanto el departamento de Lambayeque, que es donde se hace la observación de la presente investigación, cuanto la ciudad de Lima que representa un gran sector de la población nacional, adolezcan de tal incidencia que conlleva a la comprensión de la inseguridad ciudadana al punto que obliga a la gestión pública a desarrollar acciones con el fin de solucionar dicho problema.

En ese marco resulta importante observar cuál ha sido la tendencia que ha enfocado el Estado peruano para el control de la criminalidad, específicamente de la

que corresponde a la situación social de difícil control como es la acción delictiva de parte de los jóvenes, tarea harto difícil de conseguir puesto que hasta la fecha no se han registrado efectos positivos respecto a la reducción de índices.

Sin embargo, resulta importante el hecho de que la manifestación de la delincuencia en el ámbito nacional no ha sido analizada de manera lo suficientemente adecuada así se puede reconocer de la afirmación de que: No queda claro si en el Perú pueda haberse dado el caso de que grupos de delincuentes hayan reclutado a los jóvenes de pandillas para sus negocios (...). (MINJUS, 2013, p. 79)

Esta apreciación se muestra en función de la observación de ciertos sectores de la población en los cuales la incidencia delictiva de los jóvenes es la más alta, pero precisamente el problema está en la vinculación que resulta dificultosa para su determinación, en tanto que la presencia de organizaciones criminales tiene una amplia red de condición escurridiza de la justicia, que hasta la fecha no se ha podido solucionar su efecto en la sociedad, lo cual denota también la dificultad contra la acción de control sobre los actos delincuenciales juveniles.

Así se tiene pues como una de las acciones que origina el interés de esta investigación, la creación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprobado mediante el Decreto Legislativo 1348 publicado en el Diario Oficial el Peruano el día 7 de enero del año 2017, cuerpo legal que llama la atención sobre muchos aspectos, sobre todo el hecho de que es prácticamente un acomodo de la estructura del Código Procesal Penal para la aplicación a menores, lo cual sin duda implica un tratamiento igual a la imputabilidad que corresponde a un mayor de edad.

Partiendo de ello, importa además la observación de una suerte de exceso sobre el límite que corresponde a la imputación, el carácter de responsabilidad penal

disminuida que les corresponde a los menores de edad no se condice con el parámetro exacto del Código Penal que en su artículo 20 se refiere a la inimputabilidad para menores de 18 años de edad.

El cuestionamiento de esta investigación se lanza en dirección del control de la regla penal sustantiva ejecutada por este nuevo cuerpo legal, es decir buscar las justificaciones jurídicas válidas para la necesaria modificación previa de los límites que pesan sobre la acción punitiva de imputar delitos por parte del Estado, a fin de que quienes no han alcanzado la mayoría de edad, bajo ciertos parámetros, puedan responder penalmente por sus actos contrarios al ordenamiento jurídico peruano.

Toda esta creación de actividad revisora de los efectos de la estructura procesal que se ha diseñado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, servirá de guía para el desarrollo de la investigación proyectada con la intención de poder reconocer las falencias de las que adolece dicho cuerpo legal y en base a ello generar la propuesta de solución a fin de alcanzar un correcto control social sin salirse de los límites que impone el Derecho Penal garantista.

La investigación proyectada se justifica en un ámbito social puesto que la creación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes se puede considerar de un origen atribuible a las condiciones sociales que se presentan bajo la influencia de ámbitos como el mediático, que surge basado en el exceso de participación de adolescentes en actividades delictivas, lo cual genera malestar en la población y un nivel de insatisfacción de la acción del Estado para generar control.

Por otro lado se halla una justificación de tipo doctrinaria la cual se advierte al verificar la justificación jurídica de la imputación penal que se pretende atribuir a los adolescentes como si se tratara de sujetos dotados de capacidad absoluta, cuando

en el ámbito de interpretación doctrinaria aún se mantiene la postura que solventa el diseño que considera inimputables a los menores de 18 años, controversia que se buscará describir, interpretar y en función a sus resultados proponer un rediseño procesal de la regla estudiada o quizá la modificación de la estructura sustantiva penal a fin de dotar de asidero jurídico al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Se considera que resulta de suma importancia la observación de la posible vulneración que tiene que ver con la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, toda vez que la identificación de las falencias de las que adolece dicho cuerpo legal servirán de base para la generación de la propuesta que sirva de herramienta para la solución del problema evitando con ello la vulneración del límite de responsabilidad penal establecida en el Código Sustantivo; promoviendo además una condición para generar eficacia en la aplicación de las sanciones que realmente correspondan a los menores sin vulnerar sus derechos fundamentales.

Siendo importante también esta investigación por el hecho de que al identificarse los factores negativos se estaría dotando de eficacia a la regla y como efecto directo la disminución de los índices delincuenciales, a través del control social.

## **1.2. Formulación del Problema.**

¿De qué manera la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los menores?

## **1.3. Objetivos.**

### **1.3.1. Objetivo general**

Determinar si la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los menores.

### **1.3.2. Objetivos específicos**

- Estudiar la estructura del Código de Responsabilidad penal de adolescentes en razón de los principios garantistas.
- Describir las justificaciones jurídicas válidas para el establecimiento del límite de responsabilidad penal de los menores y los vicios que generan su vulneración.
- Evaluar los efectos de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes respecto del control social de la delincuencia juvenil.
- Analizar la necesidad de establecer una propuesta modificatoria de la estructura del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes a fin de alcanzar un correcto control social de la delincuencia juvenil.

#### **1.4. Hipótesis.**

Si, la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los adolescentes en razón de la imposición de sanciones pese a su inimputabilidad; entonces, se requerirá modificar tal esquema bajo el respeto de los principios que inspiran los derechos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica.

#### **1.5. Variables.**

##### **1.5.1. Variable independiente.**

La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes.

##### **1.5.2. Variable dependiente.**

La vulneración del límite de responsabilidad penal de los menores.

#### **1.6. Antecedentes de la Investigación.**

Como punto de partida de la investigación proyectada, se toma referencia de investigaciones previas relacionadas con la propuesta de análisis, así se ha de tener en cuenta en primer lugar la tesis desarrollada por la bachiller Alburqueque Vílchez Jahaira (2017) que lleva por título *Análisis de las medidas socioeducativas impuestas a adolescentes infractores previstas en el nuevo Código De Responsabilidad Juvenil*, en la cual llega a la siguiente conclusión:

Con relación al tratamiento que deben recibir los adolescentes en conflicto con la ley penal, proponemos que el

tratamiento que se brinde a los adolescentes debe orientarse de acuerdo al perfil de los mismos. Asimismo, para aquellas infracciones muy graves proponemos la aplicación de la terapia multisistémica, la misma que consiste en un trabajo especializado que involucra a su familia y comunidad. Implementando un sistema con estas características se cumpliría el principio de ofrecer un tratamiento y posibilidades de reinserción a los adolescentes, antes de aplicar sanciones que busquen la represión de la infracción cometida. Es por ello que resulta necesaria la modificación del artículo 163 del Código de Responsabilidad del Adolescente que aumenta la medida de internamiento hasta por el lapso de ocho años (pág. 144).

Es de notar que la investigadora ha tenido como resultado de su análisis la ubicación de una falencia respecto del artículo 163 del mencionado Código, aduciendo que se considera un exceso del incremento de la pena de reclusión del menor adolescente, lo cual invita a pensar que efectivamente el cuerpo legal estudiado tiene problemas de composición jurídica, puesto que considerar la posibilidad de aplicar una sanción de internamiento por un periodo tan largo tendría una semejanza excesivamente similar a la que se aplica en el ámbito de responsabilidad penal de los adultos cuando se trata de penas privativas de libertad, aspecto que no puede dejarse pasar por alto, pues desdice el sentido garantista que se supone caracteriza al proceso penal en el Perú.

Tal circunstancia se ha de tomar como punto de partida en la investigación a desarrollar puesto que debe considerar como el estado del arte respecto al tema abordado, base que delimita los aspectos a evaluar dentro de la estructura procesal del citado Código a fin de encontrar las posibles incongruencias con el esquema del límite de imputación en el Código sustantivo.

Por otro lado se encuentra la investigación desarrollada por los bachilleres Chavez Ramos Ruth María, Salas Ramos Sara Suje y Hanco Mamani Yulmer Dino (2017) titulada *La Oralidad Dentro del Juicio Oral en el Proceso de Responsabilidad Penal de Adolescentes: Análisis Comparado de las Legislaciones de Perú, Costa Rica y Uruguay*; en la cual concluyen: El Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el Perú recientemente aprobado, en comparación con las demás legislaciones analizadas, ha regulado y establecido de una forma más ordenada y estructurada cada uno de los actos de los sujetos procesales, definiendo secuencialmente los actos a seguir para cada uno de los sujetos, esto permite conocer el rol o papel que juegan cada uno de ellos, y de esta manera se optimizaría el desarrollo del juicio oral (pág. 77).

La conclusión a la que llegan los investigadores citados, se aprecia como una suerte de muestra descriptiva de lo que se incorpora en el contenido del Código de Responsabilidad Penal para Adolescentes, así señala pues una adecuada distribución de roles para el desarrollo de la investigación, ha de entenderse; aspecto que resulta insuficiente como apreciación general, puesto que sólo detalla la estructura.

Sin embargo, para el sentido que se proyecta en esta investigación, que pretende reconocer en los efectos de su aplicación, unos de tipo procesal que



terminan afectando la estructura propia del ordenamiento penal en cuanto a lo que se refiere a los principios, la concepción de la responsabilidad penal, ha de ser comprendida desde una arista que esté marcada por límites, los mismos que permitirán una ejecución optimizada del ius puniendi del Estado.

Así y todo como se ha construido el esquema del Código de Responsabilidad Penal para adolescentes, más que una adecuada estructura, termina dando por sentado la incorporación de la responsabilidad penal de un sujeto que es contemplado por el propio ordenamiento jurídico como inimputable, esto es que hará falta hacer el análisis de la responsabilidad de los sujetos para esclarecer luego si es que a un adolescente se le puede imputar un delito y su correspondiente sanción en función a dicha responsabilidad reconocida por tal Código de Responsabilidad.

Es en función a estas dos muestras de las investigaciones previas, que se ha tenido en consideración el desarrollo de una investigación que se ocupe del reconocimiento de la estructura del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes desde la perspectiva de los principios rectores del derecho penal, con especial atención al principio de responsabilidad, por lo cual se hace necesaria la construcción del siguiente contenido relacionado a los principios que se incorporan en la normatividad penal.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **SUB CAPÍTULO I**

##### **El Código de Responsabilidad penal de adolescentes y los principios garantistas.**

Teniendo en cuenta el sentido de la investigación que se está desarrollando, es importante hacer el reconocimiento de su viabilidad, esto es observar las razones en las que se ha cimentado el cuestionamiento de una posible vulneración del principio de responsabilidad penal que opera en el desarrollo de la estructura normativa jurídico penal, por lo cual resulta necesaria la incorporación de datos que permitan establecer el estado del arte generado alrededor de dicha problemática.

##### **2.1. El garantismo penal como límite de la responsabilidad penal.**

Según lo que se ha podido recoger hasta el momento, el fundamento del garantismo se ubica en la doctrina constitucional que se proyecta sobre todas las disciplinas, es el carácter garantista que ocupa esencialmente a la ciencia jurídica como disciplina punitiva, bajo la intención de lograr la promoción de seguridad en el ámbito jurídico en base al seguimiento de los principios de los cuales se desarrollaron anteriormente; tal condición es la que ha de ceñir la acción del Estado, limitándola con el fin de asegurar una intervención alejada del abuso del poder.

Así en el camino de la construcción del derecho que se ocupa de la aplicación del Ius Puniendi del Estado, esto es el Derecho Penal tanto sustantivo cuanto adjetivo, deberán contemplar ciertos parámetros. Es así que las condiciones garantistas que se observan penalmente se vinculan con el razonamiento del principio de mínima intervención estatal mediante el ius puniendi, basado en elementos sólidos que actúan limitando tal acción interventiva. (CARBONELL, DE CABO, & PISARELLO, 2006, pág. 31)

Entonces la participación de los principios se debe tener en cuenta desde la configuración de las reglas, lo cual para el trabajo de investigación que se está desarrollando, implica la verificación de cuan adecuado fue el examen de tal contemplación de origen constitucional, para que el legislador pudiera considerar apropiada la creación de la regla que hoy se cuestiona como es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Es importante tener en cuenta incluso la forma en que se habrán de ejecutar estas reglas que fungen de novedad, puesto que de no cumplir con el contenido exacto de lo que corresponde a la estructura del garantismo penal terminarán generando confusión o una aplicación inadecuada del derecho al salir de los parámetros esgrimidos por la norma bajo la comprensión de garantismo, así en la doctrina se puede ubicar a Ferrajoli (1995), cuando detalla lo siguiente:

(...) Es además un modelo estructural de derecho penal caracterizado por algunos requisitos sustanciales y por algunas formas procedimentales en gran parte funcionales a tal epistemología: como la derivabilidad de la pena respecto del delito, la exterioridad de la acción criminal y la lesividad de sus defectos, la culpabilidad o

responsabilidad personal, la imparcialidad del juez y su separación de la acusación, la carga acusatoria de la prueba y los derechos de la defensa. (pág. 169)

Son muchos aspectos los que se han de tener en cuenta al ejecutar la tarea de comprobación del carácter garantista, según el constitucionalista, está marcada por un análisis epistemológico, incluyendo todos los principios y características, entre las que más interesa a esta investigación, la culpabilidad o responsabilidad, que es precisamente lo que ha de analizarse en la construcción del Código materia de análisis, así lo que se debe comprender en realidad es que siendo este el primer nivel y no superándolo, puede ser usado como argumento incluso para que se opine sobre su innecesaria inclusión en el ordenamiento jurídico.

En todo caso el control de esta característica del garantismo penal como límite de la responsabilidad sería una suerte de motor para poder examinar la secuencia de actos que deben seguirse para la correcta configuración de una regla nueva; para el caso de la incorporación de la responsabilidad penal de los adolescentes, tendría primero que hacerse una modificación a los límites que existen para el reconocimiento de la responsabilidad en materia penal, lo cual ha de observarse desde la base constitucional primero y civil después que tiene que ver con la capacidad de serlo.

De lo que se trata entonces es de comprender al garantismo como un límite, puesto que el poder del Estado es merecedor de un control, requiere de fronteras para evitar el abuso de cualquier tipo, por lo mismo que el garantismo surte ese efecto de control, que se manifiesta en primera línea por el marcador de la acción del derecho penal; ello tiene relación con el ámbito procesal toda vez que se tendrá que reconocer en primer lugar la necesidad de intervención del Ius Puniendi.

Entonces se está hablando del límite de acción que se le impone al Derecho Penal, así la fórmula Derecho Penal mínimo refleja gráficamente la necesidad de una intervención mínima (en su contenido) y garantista (en sus formas) del Derecho Penal. (GARCÍA PABLOS DE MOLINA, 2012, pág. 206), ello está condicionado sin duda alguna a la manera en que se construyen las políticas públicas orientadas a la construcción de las reglas adecuadas para el control, dicho control será en función a las condiciones en que se presenta en la realidad aquella acción delictiva.

Suele suceder cierto tipo de situaciones en las que las conductas delictivas dependan de una motivación que se origina en un ámbito o aspecto social, lo cual sin duda alguna debe ser atendido respecto a sus características de manera directa, tal intervención será de acuerdo a los lineamientos del Derecho Penal, pero se requiere que las acciones que ocupen a esta disciplina sean lesivas en un nivel más bajo posible. Esto implica la consideración de acciones destinadas a controlar pero sin la intención de dañar, por ello es que se ajusta a los parámetros del garantismo en tanto se pretende proteger los derechos fundamentales.

Ello toma sentido en tanto lo que se identifica como justificación para la incorporación del Código de responsabilidad penal de los Adolescentes es el control de la actividad criminal a nivel juvenil, esto es que se pretende solucionar el problema de la explosión de los crímenes en manos de adolescentes que terminan siendo sancionados sólo con ciertas reglas de conducta o internamientos en centros de reclusión de menores.

Lamentablemente para este control, en el discurrir de los tiempos no se ha podido apreciar un trabajo adecuado, previamente a la dación de las circunstancias; acción que la ciencia penal no ha podido ejecutar como solución de conflictos; es

decir el límite sobre este tipo de participación activa del ius puniendi estatal, tiene que estar marcado por la línea de necesidad, advertida de los resultados negativos que han generado las acciones previas distintas a la intervención del derecho penal que hubiera desarrollado el Estado para solucionar el conflicto.

Es claro que las acciones del Estado siempre se van a encaminar por el lado más práctico y fácil como es el caso de aplicar sanciones para que así las acciones que asumen los delincuentes se vean amedrentadas por las reglas, las penas y otras consecuencias que suponen la intervención del derecho penal; cuando lo correcto sería asumir acciones previas que permitan identificar primero, las causas que originan la problemática y luego tomar acciones de corte social y hasta criminológico, para luego finalmente en tanto se demuestre que todas estas acciones no funcionaron, recién deba abrirse la puerta a la intervención de las sanciones que incorpora el Derecho Penal.

Para este caso la acción de crear una regla que se ocupe de establecer un esquema procesal, si desde luego ordenado, pero que no tiene un respaldo de justificación; es decir, la existencia de acciones relacionadas con la responsabilidad penal de los adolescentes tendría que estar respaldada por la construcción penal general que mueva el límite de acción que el mismo Estado Constitucional y Democrático de Derecho ha creado para el reconocimiento de la responsabilidad en cuanto a lo que se refiere a los adolescentes, límite que se mantiene y que no permite la promoción de un proceso que verse sobre el reconocimiento de la responsabilidad penal de este tipo de sujetos que aún tienen la condición de incapaces.

Esta apreciación, aplica desde luego a una construcción de tipo procesal puesto que la concepción del garantismo como límite del poder también se ocupa de

esta área del derecho penal, así lo señala el investigador Aragoneses (1997), al indicar que el proceso en sí, tratándose de un grupo de acciones que bajo la propia decisión se han tornado en un ámbito que los condiciona como válidas, tal cual lo indica la doctrina como (...) una concepción garantista del proceso penal, éste pretende arbitrar un sistema de minimización del poder y de maximización del saber judicial, en cuanto condiciona la validez de las decisiones a la verdad, empírica y lógicamente controlable, de sus motivaciones. (pág. 22)

El sentido de garantía que debe ofrecer el derecho penal y por consecuencia su proceso, se vincula con un efecto de lesión disminuida, en tanto que al estar destinado a la observación de los hechos delictivos supone la puesta en riesgo de otros derechos que se refieren a la libertad personal que sin duda alguna representa un alto nivel de protección en el ordenamiento jurídico constitucional. Más allá de la incorporación de sanciones, que se entienden restringen estos derechos, podría asumirse una función de castigo, concepto que deberá descartarse de la perspectiva penal, dado que se confundiría con la teoría del derecho penal del enemigo.

Esta vinculación es la que se ha luchado por erradicar, por lo mismo que la concepción ha cambiado de un sistema acusatorio a otro de tipo adversarial, lo cual condiciona un ámbito de mayor conocimiento de parte de los operadores de justicia, lo que implica que la característica de garantismo que se debe observar en el desarrollo del proceso dependerá de cuestiones subjetivas que denoten eficiencia en el sistema de justicia. Ello además permite consolidar el nivel de calidad en las decisiones judiciales que operan sobre el contenido de las resoluciones, en tanto que deben ser correctamente motivadas, lo cual se traslada al ámbito de confianza que se tendrá sobre el carácter decisorio de la actividad jurisdiccional.

De acuerdo a lo señalado por el autor citado, se vuelve a la idea de control, siendo que la motivación es un aspecto importante, que ha de asumirse al momento de ejercer el control de las acciones que incorpora el Código cuestionado, esto es que la investigación en el momento oportuno tendrá en cuenta esta base teórica para llegar al establecimiento de si efectivamente se contempla esta cuestión de validez de los resultados que se obtienen al aplicar la regla.

Definitivamente se ha de entender como la principal de las acciones de control, el límite del poder del Estado a través del órgano Judicial, así la política pública que se constituya como lineamiento de acción para el ejercicio de dicho control deberá ser lo suficientemente nutrida en el ámbito jurídico para reconocer de manera previa si es que el nuevo esquema que regula la responsabilidad penal de los adolescentes se ajusta al parámetro de garantismo y a la intervención mínima de la intervención del Derecho Penal para evitar desequilibrio en la acción judicial.

## **2.2. La observancia del principio de legalidad.**

Conforme se ha reseñado, la participación de los principios resulta de vital importancia para el correcto desempeño del derecho penal. Como una percepción general ha de comprenderse la participación del principio de legalidad, que como bien lo señala: (...) Se trata de una exigencia de seguridad jurídica, que permite la posibilidad de conocimiento previo de los delitos y faltas y las penas; además de una garantía política, en el sentido que el ciudadano no podrá verse sometido por parte del Estado ni de los jueces a penas que no admita el pueblo. (Bramont Arias, 1992, pág. 19).



Es claro comprender la importancia de este principio, en razón de la sindicación del término exigencia entendida como un mandato básico, seguido de la frase seguridad jurídica, lo que se entiende en forma general como una suerte de certeza respecto al ámbito de lo jurídico, así pues la participación de este principio resulta fundamental asumir de las palabras del autor citado; es decir que la estructura de la ley debe ser respetada y aplicada en forma directa a fin de establecer garantías.

Para el caso que se toma como problema por tratarse de una regla de tipo procesal, puesto que marca la estructura de un proceso de corte penal, ha de buscar el alcance de este principio que corresponde al ámbito del derecho penal general, para poder establecer con certeza su aporte sobre lo que interesa en relación a la aplicación de la estructura de la ley, lo cual apoyará el argumento de que la estructura normativa comprende una excepción limitante que aplica sobre la intromisión que ejecuta la estructura estatal en función a la potestad punitiva que posee, respecto de cierto tipo de personas, restricción en función a la edad de los sujetos, sobre los cuales no se puede reconocer responsabilidad, puesto que la imputación no está permitida para ellos.

Vista la participación del principio de legalidad en el ámbito del derecho penal desde una perspectiva general, resulta necesario saber si es que este principio tendrá el mismo alcance en lo que corresponde a la regulación procesal, puesto que la temática central de esta investigación corresponde precisamente a la observación de la estructura de una regla procesal, en ese sentido se ha considerado recurrir a la postulación del investigador Barbosa Castillo (2005) que sobre el concepto de la legalidad en tanto principio, indica que observando el ámbito del proceso penal es necesario incursionar incluso fuera del aspecto de la concepción que

tradicionalmente se ha realizado sobre el *nemo iudex, nemo iudicio sine lege*. Esto en tanto que de plano es aceptado el razonamiento dirigido a entender que esta secuencia de actos procesales representa un aspecto que supera la cuestión formal sin sentido, que ha sido diseñada de manera minuciosa por los legisladores (pág. 122).

El autor de la cita recogida hace una recomendación en cuanto se refiere a la comprensión de la función de los principios en el ámbito procesal, si bien es cierto que la perspectiva procesal implica una suerte de ejecución de lo plasmado en la parte general que define el delito, cuya aplicación requiere de una secuencia de actos que serán ejecutados por los operadores de justicia sin mayor prerrogativa que el cálculo y la observación de parámetros; ello implicaría que se trata de un mero cumplimiento de reglas sin la necesidad de un juicio para su correcta aplicación.

Este aspecto es el que sugiere debe erradicarse de la comprensión, lo cual indica debe hacerse desde el sentido que toma la creación de la propia regla, así para el caso de esta investigación tendría que ver con la aplicación del principio de legalidad al momento de la creación de la regla y la observación de los argumentos que justifican su creación; en ese sentido tendría que distinguirse si el argumento esgrimido por el legislador cumple con el examen de legalidad. Es evidente que una de las pautas que se tendría que revisar es precisamente el de la responsabilidad penal respecto a los menores de edad.

Tal parámetro, se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico sobre la base de la comprensión de la capacidad de los sujetos, siendo considerados principalmente aquellos que se ubican en el rango de edad inferior a los 18 años, lo cual restringe el nivel de responsabilidad, vale interrogar si este nivel tendría que ser observado desde la perspectiva de la inimputabilidad para alcanzar una correcta

comprensión de lo que pudiera servir como argumento para superar el límite de la responsabilidad penal de los menores.

## **SUB CAPÍTULO II**

### **EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.**

En atención al planteamiento del problema para esta investigación, se ha considerado el desarrollo de este acápite respecto a la responsabilidad penal de los menores, con el fin de conocer el sentido de dicho concepto, para lo cual habrá de relacionarse con el ámbito de su origen, siendo por ello importante reconocer el planteamiento de la capacidad como herramienta jurídica para la comprensión del límite de la intervención del Estado en la aplicación de sanciones respecto a la responsabilidad que se les pudiera atribuir.

Partiendo del hecho del reconocimiento de la responsabilidad que genera en el ámbito penal la atribución de una sanción, esto es como resultado de la imputación de un delito, se debe indicar que dicha cadena no se pretende cuestionar, sino mas bien, hacer un examen de la secuencia previa que provoca la intervención del derecho penal sobre las acciones de los adolescentes; siendo así, interesa reconocer el respeto de la estructura normativa, el respeto a los parámetros de la Constitución, que como ya se había dicho anteriormente son la base del garantismo que se entiende como característica del derecho penal y procesal penal.

Establecer este control es sumamente importante porque cubrirá la protección del ser humano incluso ante la necesidad de que se establezcan sanciones a través del Derecho Penal, así lo señala el maestro Zaffaroni (1989) al indicar que: El discurso jurídico penal no puede desatenderse del ser y refugiarse o aislarse en el debe ser, porque para que ese debe ser sea un ser que aún no es debe reparar el devenir posible

del ser, pues de lo contrario lo convierte en un ser que jamás será, o sea, en un embuste. (pág. 23)

Ante la exigencia de que el proceso penal tenga que ser garantista, se entiende que ha de ser característica de la intervención que se plantea en el Código de Responsabilidad que ahora se examina; por lo tanto, debe verificarse el cumplimiento de los principios del Derecho Penal que emanan de la Constitución, pero no bastará con observar que se plasmen en el instrumento jurídico, sino que se requerirá de la evaluación de su efecto, en ese camino se ubica la necesidad de revisar los límites como control de la acción del Estado sobre las acciones de los menores de edad, por ello es importante tomar como primera acción el sentido de dicha responsabilidad basada en la capacidad.

## **2.1. La capacidad civil de los menores de edad.**

Un aspecto importante que debe dejarse en claro al embarcarse en la incorporación del contenido en esta sección, es la comprensión de la responsabilidad penal partiendo de la perspectiva civil, por lo mismo que se hace necesaria la verificación de los conceptos más básicos y acertados que se pueden recoger desde la doctrina, a fin de solventar un entendimiento adecuado de la realidad que engloba al problema de los menores de edad aún cuando se encuentran cercanos al límite que marca la edad para ser considerados como responsables.

El esquema normativo que rige al Estado Constitucional y Democrático de Derecho, incorpora la protección del ser humano basado en su dignidad por su condición de tal, estableciendo libertades y límites para el ejercicio de sus actividades en función a la intervención del Estado con su poder; produciéndose dicho control como límite del poder desde el Estado para quienes forman parte de la sociedad, de

estos últimos hacia la estructura estatal, así como el que compete entre miembros de la sociedad.

En este marco de control es que aparecen otras normas que como complemento permiten reconocer la capacidad de los sujetos para ejecutar acciones, percibirlas, disfrutarlas y demás posibilidades que ofrecen las libertades en tanto derechos; lo cual desde una perspectiva individual es limitado en función a los derechos o libertades de los demás sujetos que forman parte del Estado.

Entonces se hace referencia al campo de la capacidad de los sujetos por lo que resulta necesario partir de su comprensión, para lo cual se toma en consideración que se trata de las condiciones que permiten aceptar como apto a un sujeto para asumir la titularidad de ciertas acciones desde la perspectiva jurídica y en base a ello puede ser ejecutada como un sujeto, posición que es otorgada en el ámbito del derecho como regla (Roca Mendoza, 2015, pág. 115); desde luego esta indicación surge de la injerencia constitucional en el esquema del ordenamiento jurídico, lo cual puede asumirse como una situación de poder, en tanto existe dicha contemplación en el ordenamiento que especificará cuán amplia es dicha capacidad.

Ha de entenderse que esta facultad como toda libertad que está comprendida en el ordenamiento jurídico, tiene como característica la presencia de limitaciones, esto garantiza que la acción no sea con potestades absolutas, es decir corre la suerte de los propios derechos fundamentales que resultan ser relativos en tanto existan otros derechos que sirvan de barrera para su ejercicio, sólo así se consigue el equilibrio en el esquema de la sociedad.

Siendo así, lo interesante respecto a la percepción de la capacidad a nivel civil estará orientada al cumplimiento de ciertas facultades relacionadas con la capacidad

de ejercicio y de goce en tanto se produce como consecuencia de las acciones particulares; luego en el ámbito del derecho público dicha concepción es recogida para el control del poder teniendo como base la protección de los intereses supra individuales; en ese sentido dicha capacidad también requerirá de cierto grado de limitación necesaria, para evitar colisionar con los aspectos naturales del ámbito privado.

Se ha de observar también el hecho de que la capacidad puede ser comprendida desde dos formas una estática y otra de tipo dinámica, siendo la primera aquella conocida como la capacidad de gozar de algo y la segunda como la capacidad de ejercicio que concede la posibilidad de accionar en cumplimiento del deber y ejercer la facultad que otorga el derecho mediante la actividad que se muestra como un acto jurídico. Que, al ser comparada con el goce en tanto capacidad del sujeto, podría ser condicionada a límites mediante la exigencia de las leyes que son impuestas por el ordenamiento jurídico y que se basan en determinado criterio de razón (Varsi Rospigliosi & Torres Maldonado, 2019, pág. 201).

Es decir, para el caso de la capacidad de la persona natural existe un límite que se comprende como restricción de la misma, así, el derecho penal considera necesaria esta contemplación en tanto que asumir la condición de responsabilidad precisa como condición especial que sea evaluada la capacidad que corresponde al sujeto para estar en posición que le permita decidir entre lo bueno y lo malo, esto es la teoría del hombre medio, en completa capacidad para razonar, por lo mismo que no se le podrá imputar la comisión de un delito.

Es por ello importante que la construcción de las reglas o esquemas de acción de parte del Estado estén compuestas en función a las pautas que el propio sistema

incorpora con el fin de que el ejercicio del poder que tiene para controlar a través de la sanción sea lo suficientemente apropiado para no romper el equilibrio social con el exceso de intervención.

## **2.2. La responsabilidad penal.**

Como parte esencial del enfoque de esta investigación se ha de tener en cuenta el concepto que la doctrina jurídica ofrece para definirla, es así que se tiene la indicación sobre un tipo de responsabilidad u otra nominación como responsabilidad de tipo criminal o el estado referido a la imputabilidad en tanto haya de ser atribuida sobre cualquier persona. Esto se condiciona a una cuestión de obligación que se adquiere en razón de la atribución de dicho carácter sobre un sujeto de derecho cuya principal característica es que sea imputable penalmente, esto es que tenga la capacidad de responder por dicha atribución.

Esta atribución dependerá de la existencia de un vínculo que se establece en función de la acción que supere las condiciones de tipificación en relación con el sujeto que se supone ha sido el que ha producido dicho evento antijurídico, lo cual deberá estar debidamente configurado en el ordenamiento jurídico penal sustantivo bajo la prerrogativa de una acción delictiva. Descripción que debe estar correctamente detallada a fin de poder identificar el nivel de responsabilidad como atribución que conlleva a la consecuencia de aplicar una sanción sobre el sujeto encontrado responsable.

Es así que, la responsabilidad designa, tras la antijuricidad, una valoración ulterior y que por regla general da lugar a la punibilidad, en el marco de la estructura del delito. Mientras que con el predicado de la antijuricidad se enjuicia el hecho desde



la perspectiva de que el mismo infringe el orden del deber ser jurídico penal y que está prohibido como socialmente dañino, la responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto. (ROXIN, 1997, pág. 791)

De acuerdo a la percepción que se tiene sobre este tipo de responsabilidad en el ámbito punitivo, se entiende que ha de ser ejecutada o atribuida después de haber transitado todo el proceso de investigación que se proyecta sobre la demostración de los niveles de culpabilidad que le corresponden al sujeto que ha sido imputado por la acción ilícita. Esta evaluación toma como punto de partida a la cuestión típica con la cual se refrenda la existencia de la descripción típica, seguidamente se analiza el sentido antijurídico de la acción delictiva, la que termina siendo constatada en tanto los hechos o las acciones que se han llevado a cabo infringen las reglas de la estructura jurídica. Es recién después de tal discurrir que será posible generar la atribución al imputado de su condición de responsable sobre el hecho ilícito que se observa.

Como es de notar, se aprecia una estructura de actos que conllevarán a un razonamiento puntual sobre el reconocimiento del nivel de responsabilidad penal que se atribuirá al sujeto, lo cual implica además ciertas condiciones que deben cumplirse, que de entrada se tiene a las relacionadas con la capacidad del sujeto que se pretende imputar, referidas a los aspectos de tipo físico y hasta psíquico que deben alcanzar parámetros mínimos, esto es lo concerniente a la imputabilidad. Al estudio de estas condiciones corresponde el concepto de imputabilidad. Así, imputabilidad o capacidad de culpabilidad es la suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal. En este sentido, que no padezca de anomalía psíquica o una grave

alteración de la conciencia o de la percepción, posee ese mínimo de capacidad de autodeterminación que orden jurídico exige para afirmar su responsabilidad. (VILLAVICENCIO TERREROS , 2009, pág. 594)

Tal cual se indica, la definición de la imputabilidad está vinculada con las condiciones de capacidad, ello atendiendo sin duda a cuestiones de orden somático y hasta psíquico, en tanto que esto permite evidenciar una circunstancia de fortaleza en el ser que se proyecta sobre la responsabilidad, sólo se podrá percibir el peligro por ejemplo si se tiene cierto grado de conocimiento del evento y sus consecuencias. Tal circunstancia también opera en razón de las acciones que se entiende como ilícitas y la vinculación con el perjuicio requiere de cierto nivel de capacidad de comprensión o madurez en el sujeto.

Sobre lo último también se puede asegurar el hecho de que la acción delictiva debe tener un nivel de razón, que exista un motivo por el cual el sujeto se orienta a la comisión del delito, esto es que se genere una evaluación previa de las circunstancias, del carácter ilícito de la acción, el riesgo al que ese expone como ciudadano, el daño que se puede ocasionar sobre otros ciudadanos, así como también el sentido de orientación al aprovechamiento. Todo ello implica condiciones de certeza y razón, es decir que el sujeto que delinque tenga la convicción de lo que está haciendo y que sobre ello llegue a establecer la decisión de cometer el acto.

Tal cual se puede apreciar, el análisis de las condiciones implica que se verifique la capacidad que pueda desembocar en el sentido de la imputabilidad, la condición de imputable es un elemento esencial, desde luego se requiere del examen previo de la tipicidad que además se acompañará de la antijuricidad; que seguidamente de esta evaluación se podrá constituir el injusto penal, sólo así será

posible la atribución de culpabilidad que le ha de corresponder al sujeto que se evalúa sobre sus actuaciones. Sin duda alguna con tal apreciación no será suficiente para dar por agotado el examen de la realidad, aun cuando se ha determinado culpable al sujeto, también tendrá que verificarse si es posible asumir dicho rol, dadas sus características de mínima aptitud de tipo físico y psíquico, lo cual ha consolidado la estructura de comprensión sobre los hechos que ha realizado.

La imputabilidad penal se sustenta en la capacidad de una persona de poder responder jurídicamente por sus acciones y, por lo tanto, recibir imputaciones penales. Dado que esta situación es predicable de todos los ciudadanos, la imputabilidad es la expresión del principio de igualdad. En nuestro sistema penal la capacidad de recibir imputaciones penales empieza a partir de los 18 años. Pero, por otro parte, no basta con ser mayor de edad para ser imputable, sino que es necesario que la persona esté en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que le permitan percibir adecuadamente la realidad, comprender el orden social y determinarse conforme a esta comprensión. Una persona es penalmente imputable únicamente bajo estas condiciones. (GARCÍA CAVERO , 2012, pág. 634)

Según lo indicado debe concebirse a la condición de imputable como la suma de diversas características relacionadas con la condición de capaz que puede reconocerse en un determinado sujeto, esto implica la posibilidad de que se pueda responder por la atribución de sanciones o condiciones restrictivas que resulten de la determinación de responsabilidad. Esto implica la capacidad para responder por los propios actos con la disposición de los derechos que le corresponden, sólo bajo el parámetro de disponibilidad del sujeto sobre su ser y otras condiciones. Tal cual se

muestra en la estructura normativa este tipo de capacidades se han señalado como aquellas que se adquieren por todos los sujetos que en vías de normalidad alcanzan la mayoría de edad, esto es los 18 años.

Esta última indicación es concerniente a las condiciones en las que se puede ubicar un menor de edad, puesto que al no poseer las características que corresponden a un sujeto con mayoría de edad, no se podría reconocer sus capacidades físicas y psíquicas que conlleven a la comprensión de la realidad punitiva que se le atribuye. Por lo mismo que es importante la evaluación de la estructura procesal, a fin de ejecutar de manera adecuada los rasgos paramétricos de la investigación penal; esto es revisar y evaluar la forma en que la estructura procesal del Código en estudio genera imputación penal y más aún que ésta posea una tendencia a la atribución de responsabilidad a partir de los dieciséis años y no a los dieciocho, situación que repercutirá en diversos ámbitos de la esfera del Derecho Penal, que en su momento se estudiará.

Actualmente, en la consolidación de los Estados Sociales de derecho, Estados fundamentalmente garantistas y apegados en la estructuración de sus ordenamientos jurídicos a los derechos fundamentales y especialmente a la dignidad humana, se tiene el principio de culpabilidad como base de la responsabilidad, lejos del antiguo planteamiento de la responsabilidad objetiva. En el marco de la responsabilidad penal, el concepto de imputabilidad constituye un tema central para la comprensión de la teoría del delito, se trata nada menos que de averiguar y caracterizar quienes tienen (o no tienen) capacidad para ser culpables. (Suarez Hernández, 2015, pág. 08)

Como se indica, es trascendente la influencia de la estructura normativa constitucional en el ámbito del derecho penal, tal cual se indica, existe una

concepción que determina el sentido proteccionista, vale decir que se orienta a la seguridad jurídica que le corresponde atender al Estado, como parte de las obligaciones que corresponden a la gestión gubernamental. Es así que la función de control debe estar orientada a la protección de los sujetos de derecho, por lo mismo que la imputación de los delitos tendrá el sello de garantía que ofrece el ordenamiento constitucional.

Esta percepción permite indicar que la circunstancia de culpabilidad tendrá que ser evaluada en virtud de la capacidad del sujeto para poder asumir tal condición, esto es que sólo puede ser atribuida a quien tenga el conocimiento pleno de las acciones que realiza y que éstas lo vinculen directamente con un hecho que atenta el orden que establece la estructura legal. Es así que para el caso de los menores de edad no sería posible realizar este examen o tal determinación como resultado de lo que se evalúa en tanto fenómeno de la realidad, ello debido a que los sujetos de derecho requieren estar imbuidos del conocimiento previo de la situación.

En virtud a lo señalado, se puede indicar que la condición atribuible de responsabilidad en el ámbito penal se vincula directamente con el concepto de sujeto imputable, el mismo que se consolida como la piedra angular que permite asumir la construcción de la teoría delictiva. Esta secuencia de evaluación es lo que conlleva a la determinación final que demuestra o deja sin efecto la acción estatal mediante el *ius puniendi*, en tanto exista vinculación entre el sujeto y el hecho y que esto pueda constituir motivación suficiente para atribuir responsabilidad penal y por ende una sanción.

Tal cual se conoce la estructura estatal con la que se cuenta es de tipo social garantista que se guía por la protección controlada del sentido fundamental de los

derechos, contemplados en el ordenamiento constitucional, que sin duda alguna están inspirados en la preponderancia de la dignidad como característica principal de la condición humana. En tal sentido, la estructura estatal peruana al igual que la conformación constitucional colombiana, de donde surge la determinación de la autora que se cita párrafos arriba y que ahora se comenta, han establecido un tipo de responsabilidad en base a caracteres o lineamientos de tipo objetivo.

De otra parte se puede apreciar un razonamiento que gira alrededor de la convicción de esta responsabilidad en el ámbito penal como un conocimiento de condición imputable del sujeto al asumirla tal cual una manera de conseguir la información adecuada que conlleve a determinar a quien se le debe atribuir la condición de responsable en tanto tenga el vínculo con la capacidad para poder asumir la culpabilidad.

### **2.3. La imputación penal y el límite de edad.**

La imputación como concepto que se maneja en el ámbito del derecho y que se ocupa de la intervención del ius puniendi estatal, se concibe también como aquella responsabilidad penal que es posible entender como la obligación jurídica impuesta a determinado sujeto que tiene la capacidad de ser imputado desde luego que puede establecer una respuesta en el ámbito penal en razón de sus actos que salen de la estructura normativa y que se encuentra tipificada como tal en el ordenamiento jurídico correspondiente. En tanto se reconozca el nivel de culpabilidad sobre tal acción ilícita será sancionado como consecuencia jurídica que se debe encontrar establecida en la misma norma que describe el hecho delictivo.

Para tales efectos de comprensión se ha de tener en cuenta una definición concreta para entender lo que significa, por lo que citaremos al reconocido jurista

alemán ROXIN, quien en su libro *“Derecho Penal – Parte General”* establece lo siguiente:

*La responsabilidad designa, tras la antijuricidad, una valoración ulterior y que por regla general da lugar a la punibilidad, en el marco de la estructura del delito. Mientras que con el predicado de la antijuricidad se enjuicia el hecho desde la perspectiva de que el mismo infringe el orden del deber ser jurídicopenal y que está prohibido como socialmente dañino, la responsabilidad significa una valoración desde el punto de vista del hacer responsable penalmente al sujeto.* (ROXIN, 1997, pág. 791)

Tal cual se puede apreciar el sentido de este tipo de atribución como condición de responsable se produce de manera efectiva en tanto se haya transitado por la secuencia de actos procesales destinados a la revisión de los actos supuestamente delictivos, con la finalidad de establecer un nivel de certeza sobre el vínculo del hecho con la condición de culpable de la persona que ha sido imputada por tal acción ilícita. Para lograr esta actividad se toma como punto de partida a la tipicidad, pues en tanto se encuentre tipificada la condición delictiva en el ámbito normativo, luego se revisa el ámbito de la antijuricidad ello en tanto se verifique un tipo de lesión de parte de la conducta que se observa, lo cual es posible constatar en tanto el acto atenta contra el orden que impone las reglas; el resultado de esta secuencia es lo que lleva a establecer los medios de certeza que permitan atribuir el sentido de responsabilidad al sujeto perseguido.

*La realización del injusto penal (conducta típica y antijurídica) no basta para declarar al sujeto culpable. Es necesario que el autor posea ciertas condiciones mínimas- psíquicas y físicas- que le permitan comprender la antijuricidad de su*

*acción y de poder adecuar su conducta a dicha comprensión. Al estudio de estas condiciones corresponde el concepto de imputabilidad. Así, imputabilidad o capacidad de culpabilidad es la suficiente capacidad de motivación del autor por la norma penal. En este sentido, no padezca de anomalía psíquica o una grave alteración de la conciencia o de la percepción, posee ese mínimo de capacidad de autodeterminación que orden jurídico exige para afirmar su responsabilidad (VILLAVICENCIO TERREROS , 2009, pág. 594)*

Como hasta ahora se ha indicado existe una condición previa para lograr la atribución de la condición de responsable penalmente a un determinado sujeto, se tendrá que realizar una suerte de filtros o de evaluación de la acción delictiva, sobre la base de la condición típica y antijurídica, lo cual se ha de enfocar en analizar lo que se considera como injusto penal, sólo así se podrá concebir la existencia del vínculo entre la acción y el sujeto. Es importante señalar que esta evaluación puede agotarse además con la inclusión del análisis respecto de las condiciones cualitativas del sujeto; esto es que, debe ser encontrado objetivamente responsable en el ámbito psíquico y físico, lo que permitirá al mismo tiempo que pueda asumir conceptualmente y alcanzar comprensión del resultado ilícito de su actuación.

*La imputabilidad penal se sustenta en la capacidad de una persona de poder responder jurídicamente por sus acciones y, por lo tanto, recibir imputaciones penales. Dado que esta situación es predicable de todos los ciudadanos, la imputabilidad es la expresión del principio de igualdad. En nuestro sistema penal la capacidad de recibir imputaciones penales empieza a partir de los 18 años. Pero, por otro parte, no basta con ser mayor de edad para ser imputable, sino que es*



*necesario que la persona esté en pleno uso de sus facultades físicas y mentales que le permitan percibir adecuadamente la realidad, comprender el orden social y determinarse conforme a esta comprensión. Una persona es penalmente imputable únicamente bajo estas condiciones* (GARCÍA CAVERO , 2012, pág. 634)

El carácter o condición que se reconoce del propio sujeto que ha sido imputado por la comisión de un hecho delictivo se convierte en un elemento importante para ser analizado, con el fin de establecer si puede ser responsable o no de dicho acto; esto quiere decir que no bastará con el reconocimiento del hecho que incluso puede ser en condición de flagrante, puesto que además se precisará de una evaluación de las capacidades del sujeto para que pueda alcanzar la comprensión de los hechos realizados y sus efectos.

Esta condición de imputabilidad es concebida en razón de las capacidades que poseen todos los seres humanos para lograr establecer un sentido de respuesta a nivel jurídico como consecuencia de los efectos que producen las acciones personales. Como tal este nivel de capacidades no es una cuestión estática, es decir que puede variar dependiendo de ciertas condiciones, de tipo físico o psíquico como es el caso de los menores de edad que con la mayoría de edad pueden alcanzar un nivel de capacidad suficiente para ser imputables penalmente, o en el caso de los ancianos que alcanzando cierto límite de edad dejan de serlo.

Lo señalado tiene un nivel importante de injerencia sobre el sentido de evaluación de la responsabilidad basada en las capacidades, lo cual ante la existencia actual del ordenamiento (que imputa responsabilidad penal a los adolescentes bajo la atención del principio de legalidad) no estarían en la capacidad de responder

jurídicamente ni válidamente sobre la atribución de responsabilidad penal, por lo mismo que permanece su condición jurídica como inimputable.

Vemos pues como la edad en una persona va a tener repercusiones no sólo para la intervención del derecho penal, sino que además a determinada edad la persona adquiere derechos que corresponden propiamente a un ciudadano, tales derechos giran en torno al ámbito civil y político; razones por las que al cumplir la mayoría de edad va a traer repercusiones en distintos aspectos de su vida personal y no sólo en el ámbito penal.

Una vez que determinada persona cumple la mayoría de edad, que para el caso de nuestro país como en la mayoría de todos se adquiere con los dieciocho años, se convierte en un sujeto plenamente imputable bajo los preceptos que establecen las distintas leyes penales. Esta situación que acabamos de describir, creemos no constituye obstáculo para que menores de dieciocho puedan responder penalmente por las acciones ilícitas que cometan, desde luego que tal posibilidad la fundamentaremos con las doctrinas criminológicas adecuadas y los teorías necesarias del Derecho Penal que garanticen el respeto irrestricto de los principios que inspiran el derecho penal garantista.

De acuerdo a lo que se indica doctrinariamente, la presencia de la responsabilidad resulta de mucha utilidad para poder aplicar sanciones, dado que se podrá imputar en función a ella la comisión de los delitos, esto es que la ausencia de responsabilidad limitaría la intervención del ius puniendi del Estado; tal condicionamiento se advierte al señalar que: La proscripción del principio de

responsabilidad objetiva implica que la imputación sólo puede hacerse por dolo o imprudencia (...). (Villavicencio, 2003, pág. 105)

Siendo así, resulta propio advertir que para el caso de la evaluación del dolo o la imprudencia que conduzca al reconocimiento de la responsabilidad, se ha de tener la certeza de que se podrá imputar sanción en razón del resultado, es decir que el sujeto cuya imprudencia o dolo se evalúa, pueda ser susceptible de imputación; es allí donde se ubica a la edad como aquel elemento que limita todo este mecanismo que conlleva a la comprensión de la responsabilidad penal, luego, los menores de edad tienen a su favor ello como límite a la responsabilidad, lo cual no se advierte en sintonía con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Todo ello se condice además con la imposición que plantea la Convención de los derechos del niño, que marca pautas específicas para el manejo de la responsabilidad de los menores infractores, cuyo trato especial ha de ser respetado por los países en su derecho interno, contemplando reglas que se mantengan en los límites; en lo que se refiere a la responsabilidad que conduce a la imputación de ciertas acciones, cuya evaluación se ve orientada por un esquema que resulta ser copia del sistema para la sanción de los adultos, es decir sale de la estructura convencional.

Esto último en razón de que la Convención sobre los derechos del menor, protege de manera específica respecto a su tratamiento con el esquema de justicia común, lo cual se puede reconocer cuando ella: (...) coloca a quienes tienen menos de 18 años fuera del sistema de justicia penal de adultos y es en ese sentido que son inimputables. (Geisse & Echevarría, 2003, pág. 105)

## **SUB CAPÍTULO III**

### **EL CONTROL SOCIAL DE LA DELINCUENCIA JUVENIL**

Las condiciones en las que se desarrolla la actividad jurídica están vinculadas con la realidad social, esto quiere decir que las circunstancias que experimenta este ámbito tendrán injerencia en la construcción del derecho como regla, es en este contexto que interviene la política pública como resultado de la gestión de estatal. La construcción de estas políticas depende de las pautas que se diseñan en base a la teoría del control social, que en tanto potestad de la gestión estatal evalúa la realidad que se observa como problema para establecer las pautas que permitan alcanzar un nivel de solución.

Los factores que se presentan como parte del problema en sus orígenes tienen el apoyo del ámbito criminológico que mediante su examen los determinan y sirven de base para el efecto que se espera como el control social, que en este caso se examina sobre la realidad delincuencia generada por los jóvenes en el Perú. Se entiende que las acciones de este control deben propiciar esquemas de acción sin dejar de lado la protección que debe contemplarse sobre los menores de edad.

#### **3.1. El control social y su vínculo con el derecho.**

El tema del control social como concepto se encuentra ligado con la criminología de manera muy cercana, ello por cuanto que como teoría busca una explicación para la función del grupo de acciones mecánicas que utiliza el grupo social con la finalidad de erradicar o prevenir actos que divergen del bien común y la estabilidad social. Definitivamente se puede indicar que existe un vínculo directo

y estrecho entre lo que significa el control social y el ámbito del derecho como ciencia y como regla como ya lo indica el latinismo conocido “Ubi societas ibi ius” que significa el lugar donde exista un grupo social siempre existe también el derecho.

Esto último hace referencia al hecho de que en el grupo social siempre se han de generar ciertas acciones de control mediante mecanismos que permitan lograrlo o cuando menos se intente con ello alcanzar la meta de prevención, lo cual siempre está inspirado en la existencia previa de acciones que se consideran fuera de lo común, lo correcto o aquello que se comprende como lícito.

En virtud de lo señalado se entiende que la razón de ser de estos mecanismos es generar de manera definitiva un tipo de respuesta a las conductas criminales, lo que se asume como la reacción de la sociedad o del aparato estatal, así pues, la comprensión de la reacción social, o sea, de las sanciones que las sociedades prescriben para hacer frente a las desviaciones en cualquiera de sus formas, pasa por la comprensión de la formación u origen de estas instituciones y por la indagación del cómo fue que ... (Salcedo, 2016, pág. 396)

Es así como se puede obtener una visión más clara respecto a la intervención de la ciencia criminológica, ello en tanto que su tratamiento se ocupa no sólo de la forma en que se desvía la conducta, sino también de la acción delictiva en sí o lo que se constituye como faltas en el sistema normativo jurídico, las características de quienes deciden delinquir, las condiciones de la víctima, la propia reacción estatal que se considera como una sanción que se desprende del ordenamiento jurídico en función a las estrategias que se hubieran planteado por el legislador con el fin de alcanzar estos fines.

Otra de las formas de concebir el sentido del control social, para tomar conciencia de la manera en que se ejerce mediante las reglas de orden penal sobre todo como es el caso de la construcción del código de responsabilidad penal de adolescentes que es materia de discusión, lo cual se comporta como el aseguramiento de que se cumpla con las pautas normativas que se ocupan de los actos que realizan los sujetos que participan en la sociedad. Esta existencia es lo que garantiza el seguimiento adecuado de las conductas en el grupo social y que se orienta al control de las acciones en base a la normatividad que impone límites sobre los derechos. (Toro, 2019, pág. 176)

### **3.2. El derecho penal como mecanismo de control social.**

Habiendo establecido la relación entre el control social como función que le corresponde al Estado, es importante tener en consideración el hecho de su vínculo con la estructura jurídica que se diseña para alcanzar tal finalidad. En tal sentido es posible indicar que la estructura orgánica estatal asume la obligación de generar respuesta ante las necesidades que surgen socialmente en el grupo que lo integra, sin dejar de lado las vinculaciones con el sistema de derecho internacional.

Para tal fin que se precisa de la incorporación de herramientas que permitan el logro de un estado de control social cuyo cumplimiento sea obligatorio, esto además debe implicar la restricción de ciertos derechos existentes en la realidad; es en tal sentido que la construcción de este sistema no puede dejarse en manos de los intereses de tipo particular, será el ámbito público mediante el ejercicio de sus órganos de poder quien se encargue de la construcción de dicha estructura legislativa.

Es en este marco de razonamiento político y jurídico que surge la participación del Derecho Penal como herramienta que permite controlar socialmente la actividad que en el Estado y la sociedad se desarrolla; para tal fin se espera que se inmiscuya en el aspecto de política criminal que le corresponde al Estado generar, mediante un mecanismo de corte general y que provoque acción en conjunto con las bases de la sociedad, en primer lugar la familia, para dar paso a la escuela y la iglesia como elementos coadyuvantes de dicha acción, seguidos de los medios de comunicación y los grupos civiles u organizaciones como medios de apoyo al control.

Como se puede apreciar la construcción de un sistema jurídico debe ser el resultado de algo que se proyecta al reconocimiento adecuado de la sociedad y sus vinculaciones generadas entre los miembros que la componen. Como tal la disciplina penal se debe orientar a establecer un resultado sobre la conducta de los sujetos que forman parte de la sociedad que en tanto incidan en acciones trasgresoras del ámbito jurídico, puedan acceder a los beneficios del tratamiento penitenciario en razón de las sanciones impuestas, esto es que logren resocializar su actuación y participación social con lo que se muestran posibilidades positivas de cambios sociales. (Saenz, 2020, pág. 5)

Como tal, se indica que el derecho penal se comporta como un mecanismo que coadyuva al control de la estructura social, en virtud de ello deberá considerarse tal vez como un elemento de apoyo para la gestión estatal que se vincula con la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, que deben estar presentes como pilares en la organización social. En tal sentido es que se debe indicar que (...) el control social penal como un subsistema del sistema de control social. En la práctica de la vida social del mundo contemporáneo se evidencia la preeminencia de la

intervención punitiva del Derecho Penal como control social, lo cual se halla asociado a la debilidad de los controles sociales informales. (García, 2017, pág. 106)

Sin duda alguna la presencia de actividad de represión por parte del Estado conlleva a la aplicación de una cuota de poder sobre la sociedad, a fin de establecer un índice de fuerza con la intención de lograr coerción sobre quienes pretenden evitar

el cumplimiento de las reglas jurídicas que se plantean como parámetro de exigibilidad. Para un adecuado cumplimiento de las pautas se precisa de ciertas garantías basadas en la normativa constitucional, entendida esta como la de más alto rango en el sistema jurídico de un estado constitucional; es así que se indica un vínculo entre el garantismo que ocupa al derecho penal y el límite de exigencia de aplicación mínima que le asiste cumplir al derecho penal como ciencia y como regla.

Esto último implica el desarrollo de un derecho penal que constituya una acción social o estatal mínima en cuanto a su lesividad respecto a los derechos, puesto que se entiende que la restricción que aplica el derecho penal para ejercer control, conduce a un efecto violentista de parte de la acción punitiva que le asiste al Estado como potestad. Se entiende también el hecho de que la acción delictiva supone una reacción punitiva de parte del Estado, pero debe ser esta última controlada con base en las garantías que se desprenden del ordenamiento constitucional y además se incorporan en el propio sistema penal, como es el caso de los límites a la intervención penal en razón de condiciones de capacidad que como característica tienen los seres humanos.

### **3.3. La delincuencia juvenil y el control social.**

Este aspecto de la realidad social es el más trascendental de los elementos de la discusión que se desentraña en esta tesis, toda vez que se comporta como el móvil



para que el Estado se ocupe de generar un esquema jurídico que proyecte un tipo de solución a la problemática. Vale decir que le compete a la estructura estatal propiciar elementos o mecanismos de acción que consoliden un control social adecuado sobre la realidad delincuencia; sobre todo atendiendo a que este tipo de fenómeno que se da en la sociedad conduce a la explosión de circunstancias difíciles de controlar adecuadamente sobre todo en el ámbito de la necesidad de un espacio de paz social requerido para la convivencia humana.

Se debe entender que este tipo de acciones delictivas son las que se ejecuta en manos de los sujetos de derecho que aún no alcanzan la mayoría de edad según el esquema de contemplación jurídica, lo cual se supone es propiciado por el concepto social que hace referencia a que si se trata de sujetos con minoría de edad no se les podrá aplicar ningún tipo de reproche social ni jurídico. Quizá sea una suerte de creación social el hecho de que deba darse prevalencia o impunidad a ciertos actos cometidos por los menores de edad, en virtud de su condición limitada de cognoscibilidad o capacidades de comprensión.

Es importante tener en cuenta que existe un nivel de coincidencia entre las acciones que corresponden a la estructura estatal para intervenir con el *ius puniendi*, lo cual se muestra en una misma forma de actuar independientemente si se trata de acciones delictivas cometidas en el ámbito juvenil o de parte de los ciudadanos mayores de edad, esto en base a la construcción positiva del código sustantivo penal, puesto que se basan incluso a las condiciones garantistas que opera en cualquiera de los ámbitos. (Abadías, 2021, pág. 15)

Quizá esta sea la razón de que se hayan generado o se estén propiciando pautas normativas que se impulsan hacia la punición de conductas fuera del ámbito

de la legalidad cometidas por menores de edad, pero con sanciones que se consolidan de manera similar o igual a la que corresponde a un sujeto ciudadano con mayoría de edad. Lo explicado se da pese a la existencia de límites establecidos en los propios ordenamientos jurídicos, lo cual si bien se advierte como parte ejecutiva del control social sobre un tema que se le escapa de las manos al propio Estado.

Entre los factores que se identifica como génesis de la delincuencia juvenil resulta siempre siendo enfocado sobre el propio espacio en el que desarrolla como lo es la familia, la escuela, en ocasiones el trabajo que debe desarrollar, su situación económica y demás elementos que apuntan hacia un destino común para un gran grupo de jóvenes, que es la delincuencia como una medida de escape a su situación. Es así que se reconoce como “(...) un espacio de análisis primordial la familia y el contexto más próximo al sujeto, factores ampliamente investigados entorno a la delincuencia; ya que se observan efectos recíprocos entre el ambiente familiar y del grupo con la delincuencia”. (Escalona, Rodriguez, Vilaplana, & Rodriguez, 2021, pág. 7)

Estas condiciones serán sin duda alguna elementos determinantes sobre el resultado delincencial, o más bien sobre la adopción de una conducta inclinada hacia las acciones delictivas en tanto que se puede reconocer hasta como un escape del propio joven, o la cobertura de ciertas necesidades como es en la mayoría de los casos la cuestión económica que incluso puede trasladarse hasta el ámbito de la necesidad de supervivencia. Índices graves que traen consigo una situación de fragilidad de este tipo de sujetos menores de edad que resultan cayendo en círculos delincuenciales, tergiversando su condición de sujeto protegido para pasar a ser un elemento apañado por los límites sobre la punición respecto a sus acciones ilícitas.

En tal sentido, se aprecia la participación del control social mediante la participación de variadas posturas de análisis, sobre todo para el reconocimiento de la realidad de cada ámbito, es así que cada una de las ramas académicas y científicas destinan su atención a la ubicación de las características que promueven la conducta delictiva, a la par una gran diversidad de gestiones gubernamentales en el desarrollo de la política pública incluyen acciones que se orientan a la erradicación, pese a ello no se ha podido apreciar un resultado positivo en su ejecución. (Negrón & Serrano, 2016, pág. 118)

Es precisamente en este ámbito de acción de parte del Estado que se advierte la intervención mediante el control social que se pretende establecer como lineamiento sobre la delincuencia juvenil, como se indica los resultados no son apreciados con exactitud, lo cual conduce al razonamiento de que el control ejercido no es lo suficientemente satisfactorio, hace falta completar la acción interventora, lo cual tendría quizá mejores resultados en la lucha contra este tipo de flagelo social.

Como ya se había indicado antes, la intervención estatal requiere de la participación de diversas disciplinas que permitan con los resultados de su evaluación un detalle exacto sobre los factores que se han de atender, con el fin de que el control social sea lo suficientemente efectivo, así pues, las conductas de los menores deberían establecer un lineamiento de acción. Teniendo en cuenta además que deberá considerarse entre los más importantes elementos (...) el factor social, producto de las circunstancias, lugares que habitan y amistades que los rodean, sumados a ello el olvido y la falta de atención de las autoridades; en el entorno familiar, la falta del apoyo hacia los jóvenes por ausencia de los padres es un hecho que conduce a

conductas inadecuadas. (Ccopa, Fuster, Rivera, Pejerrey, & Tupac Yupanqui, 2020, pág. 166)

## **CAPÍTULO III**

### **DISEÑO METODOLÓGICO**

#### **3.1. Tipo de Investigación.**

En función a las condiciones en las que se desarrolla la investigación en el ámbito jurídico, esta se presenta como una de tipo no experimental, debido a que por el carácter analítico de las condiciones jurídicas que se muestran en la realidad y al tratarse de la intervención de reglas, no es preciso ni posible modificar el fenómeno que se observa para poder realizar su examen crítico. La finalidad ha sido entonces, verificar la situación jurídico social que se aprecia en el ámbito de la protección de los menores de edad desde la perspectiva del derecho penal, en tanto que se estaría construyendo un campo normativo que sale del esquema limitado o la permisibilidad para atacar la condición de menor de edad en tanto su limitada imputación respecto a los delitos.

Así mismo, se debe indicar que este tipo de investigaciones permiten incorporar ciertos enfoques para el desarrollo de la evaluación de la realidad, así se tiene pues una investigación de enfoque cualitativo, ello en razón que se está ejecutando la interpretación de la realidad jurídica a la que se expone a los menores de edad ante una posible inculpación por delitos que de acuerdo al esquema penal no es posible imputar debido a los límites establecido en virtud de su incompleto criterio o percepción sobre la realidad.

### **3.2. Métodos de investigación.**

Para la ejecución de esta tesis, se ha tenido en cuenta la aplicación de ciertas rutas de acción que permitieran alcanzar las metas que se hubieron trazado al inicio de esta labor académica, así pues, teniendo en cuenta que esta tesis se ocupa de la observación de una regla proyectada sobre la atribución de responsabilidad penal a menores de edad, cabe orientarse sobre el carácter interpretativo que corresponde realizar sobre este tipo de reglas. En función a ello es que se han escogido los métodos interpretativos de las reglas, que en el ámbito jurídico resultan de trascendencia para establecer juicios de valor y construir criterios que permitan razonar una posible verdad sobre el sentido para el cual fueron creadas las reglas.

En este orden de ideas es que se consideró propicia la intervención del método de interpretación jurídica nominado como exegético jurídico, mediante el cual se ha podido observar la estructura jurídica del código de responsabilidad penal de adolescentes, para reconocer su contenido literal, esto es que la construcción gramatical de las reglas permiten observar el sentido que se pretende establecer como espíritu de la ley para observar con ello los posibles factores de incongruencia comparados con su finalidad.

Del mismo modo es que se contempló como útil la intervención del método de interpretación jurídica conocido como el sistemático jurídico, el cual conduce al reconocimiento de las orientaciones que pesan sobre las reglas de acuerdo con la vinculación que tiene con la estructura constitucional en primer término y además con la estructura del propio ordenamiento jurídico, con el fin de reconocer en qué medida calzan en el esquema normativo.

Siendo así, la función interpretativa en la que se promueve aplicar este método ha tenido como resultado verificar que no existe una exacta congruencia de la regulación de responsabilidad penal de adolescentes con el esquema constitucional existente en el ordenamiento jurídico peruano, ello en tanto que las pautas de control incorporan límites a la acción punitiva del Estado en función a las capacidades de los sujetos, lo cual en tanto no cambie deberá seguir respetándose. De otra parte, la condición elemental de la estructura jurídica penal sustantiva proyecta limitación de punición en tanto que se restringe la aplicación del ius puniendi estatal en función a las condiciones etarias que ponen a los menores de edad en una condición especial de protección.

- **El Método Inductivo:** Teniendo en cuenta que este método surge de lo particular para llegar a lo general; será usado para el análisis de los procesos de responsabilidad penal de adolescentes con cuyos resultados obtenidos caso por caso se pueda formar un criterio general sobre la existencia de un aspecto negativo sobre el límite de la imputación penal.

- **El Método Dialéctico:** Si este método se ocupa de verificar las contradicciones que tiene el objeto de estudio de la investigación, diremos que puede ser usado en la proyección embarcada, puesto que permitirá establecer si la doctrina está de acuerdo con la consagración de los límites para la sanción de las actividades ilícitas cometidas por adolescentes contempladas en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

- **El Método Histórico:** Sabiendo que este método se relaciona con la evolución del objeto de la investigación, parte desde el origen, el cual se ha utilizado para estudiar el fundamento orientador de la incorporación de una estructura procesal

similar al del proceso común para sancionar la acción delictiva de los adolescentes, buscando verificar su congruencia o viabilidad.

### **3.3. Diseño de contrastación.**

En función a las condiciones en las que se presenta el tipo de investigación, corresponde en este sentido la aplicación de un diseño de contrastación corroborativa respecto de la hipótesis que se plantea como idea a priori que intenta responder el cuestionamiento que se plantea como formulación del problema, esto está construido de la siguiente manera: Si, la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes produce la vulneración del límite de responsabilidad penal de los adolescentes en razón de la imposición de sanciones pese a su inimputabilidad; entonces, se requerirá modificar tal esquema bajo el respeto de los principios que inspiran los derechos fundamentales para garantizar la seguridad jurídica.

Se debe tener en cuenta que esta construcción obedece a un razonamiento previo al desarrollo de esta investigación, por lo cual deberá apreciarse su validez conceptual en razón de la corroboración que pueda generarse en función a su origen, el mismo que se consolidó mediante el establecimiento de las variables y su relación causal que permitió además estructurar las metas sobre las cuales se ejecutaría la investigación, tanto la general así como las específicas. En función a estas últimas es que se ha construido el marco de análisis desde el punto de vista teórico y de análisis u observación de la realidad; ello permitió que se construyera la discusión sobre cada uno de los contenidos ordenados en función de los objetivos específicos.

La construcción del discurso crítico ha permitido que se adopten posturas en función a cada uno de los objetivos específicos, lo que se proyectó como el resultado



de la determinación general que se incorpora como conclusión general, así como también la estructura de las conclusiones específicas proyectadas hacia un razonamiento común que es la demostración de la veracidad o falsedad de la hipótesis inicial.

### **3.4. Población y Muestra.**

Para la configuración de un análisis adecuado de la realidad, se plantea como población de la investigación a los Juzgados de Familia del distrito judicial de Lambayeque, donde se reconocerá la eficacia de la aplicación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Se consigna como muestra una porción de la población, por lo mismo que para ejecutar el análisis se han de revisar los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes, tarea que se ejecutará de la observación de una muestra de 20 casos tomados de los Juzgados de Familia de la ciudad de Chiclayo.

### **3.5. Técnicas de recolección de datos.**

Luego de la codificación de la información como datos, se procedió a la obtención del resultado que surge al aplicar cada instrumento en función a la correspondencia con cada técnica que se empleó para la recolección de la data informativa; seguidamente se procedió a la integración de dicha información generando un grupo de data la cual atendiendo al sentido de la investigación se sintetiza en los cuadros y el esquema gráfico correspondientes para su posterior análisis en la discusión.

- Análisis documental: Se desarrollará el análisis de la documentación existente para el establecimiento de las posturas que circundan el problema planteado respecto a la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
- Análisis dogmático: Se analizará la norma y la legislación que circunda al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con el fin de reconocer cuáles serían los aspectos pasibles de modificación, a fin de garantizar el respeto de los límites de imputación y la seguridad jurídica.

## **CAPÍTULO IV**

### **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

#### **4.1. Resultados.**

##### **4.1.1. Resultados del análisis de la estructura del código de responsabilidad penal de adolescentes.**

En este punto se producirá el examen de la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de Adolescentes, con el fin de poder identificar los efectos sobre la garantía que constituye el límite de responsabilidad penal de los menores, para cuyo efecto se inicia por el sentido que se asume de su construcción.

Resulta importante mencionar que dicho instrumento legal se incorpora en el ordenamiento jurídico a través de la aprobación del Decreto Legislativo N°1348 de fecha 07 de enero del año 2017, en cuyo contenido se aprecia entre otras, la justificación de su creación en razón de la necesidad de contar con un cuerpo normativo especializado en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestro país.

En dicho espacio justifica su creación, debido al hecho de que el Código del Niño y Adolescentes se ocupa de la situación de los adolescentes que infringen la ley penal, cuya finalidad se puede reconocer como la rehabilitación y reincorporación a su entorno familiar y por ende el social; pero dicha acción es identificada como insuficiente, toda vez que según indica como consecuencia de ello: (...) no existiendo un sistema procesal donde se tenga como objeto reglamentar la función del Estado en la protección de los derechos y la reinserción en la sociedad de aquellos cuya

conducta se encuentra tipificada en las leyes penales (Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 2017, pág. 28)

Este es un aspecto que debe analizarse en función a lo que se menciona como necesidad, puesto que se indica como justificación la ausencia de parámetros que permitan la resocialización y la reinserción del menor adolescente, esto es ocuparse de otorgar el mismo tratamiento penitenciario que le correspondería a un adulto, vale decir con un mismo grado de responsabilidad penal, aún cuando el Código Penal indica en su artículo veinte inciso dos que está exento de responsabilidad penal el menor de dieciocho años.

Además de ello, la implicancia de incorporar la estructura procesal que compone el Código examinado, bajo esta justificación, trae como consecuencia la creación de un esquema con miras al confinamiento de los menores infractores tal cual si pudiera considerárseles como delincuentes adultos, puesto que el término rehabilitación en definitiva corresponde al tratamiento penitenciario, lo que implica el internamiento en un centro especializado.

Ello trae dos consecuencias directas, la primera referida al tratamiento, que sin lugar a dudas ha de ser distinto para los menores de edad en tanto que a nivel convencional se encuentra establecido ello y tiene su reflejo en la construcción del derecho interno, toda vez que la aplicación del Código del niño y adolescentes implica una acción relacionada con ello, a través de la reeducación del menor bajo una acción coordinada con la familia y la víctima; por lo mismo que asumir un tratamiento distinto y vinculado con el internamiento no resulta el nivel más adecuado de eficacia respecto a la acción del Estado para garantizar protección y control preventivo.

En segundo lugar, la construcción que opera en base a los mismos principios del ordenamiento procesal penal configura un esquema que no coincide con la estructura de la imputación en el sistema penal que rige al Perú, así se encuentra dispar con lo establecido respecto a la regla de inimputabilidad, que en todo caso debió modificarse con el fin de procurar operatividad a este nuevo proceso de justicia penal de adolescentes en conflicto con la ley penal.

#### **4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

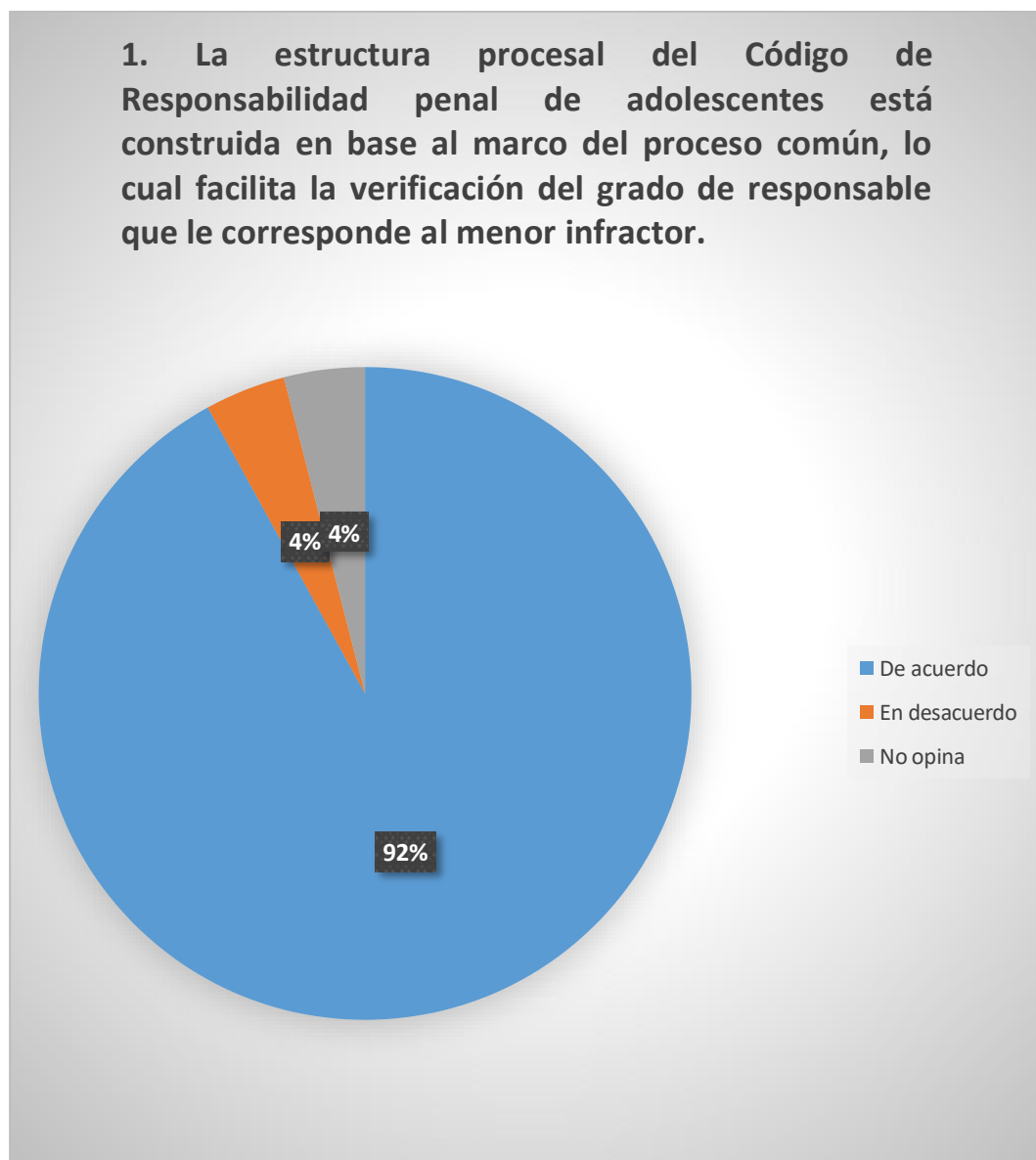
Como parte de la aplicación del método de observación de la realidad, resulta importante considerar la opinión de los expertos que se ocupan de este tipo de actividades, para lo cual se ha diseñado un formulario de encuesta en el que se incorporan afirmaciones destinadas a plantear el sentido de la investigación. Para tal fin, se ha construido dicha estructura en base a las variables que son los ejes de la investigación, lo que se puede apreciar en el anexo primero de esta tesis.

La aplicación de esta encuesta se ha realizado de manera virtual y presencial, lo cual permitió que los resultados se consolidaran en función a los 50 participantes entre jueces y abogados, así como funcionarios jurisdiccionales en el sistema de justicia quienes tienen conocimiento del tema. Estos resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se plasman en las correspondientes tablas del sistema APA; es por ello que la función de tabulación cobra preponderancia, así como la graficación porcentual que permite realizar una observación bastante interesante respecto al Código de Responsabilidad penal.

*Tabla 1: Resultados obtenidos sobre la afirmación: La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor.*

1. La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor.	
Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	46
b. En desacuerdo	02
c. No opina	02
Total	50

*Ilustración 1: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor.*



**OBSERVACIÓN:**

De acuerdo al resultado obtenido es posible reconocer en la población encuestada la existencia de un 92% que se encuentra a favor de la definición postulada, esto es que la forma en que se ha estructurado el código bajo análisis, permite observar un sentido direccionado al campo del derecho penal común, esto

es el que se aplica a los sujetos responsables de actos delictivos que se encuentran en el ámbito de la responsabilidad penal.

Dicha configuración es lo que permite ver la relación directa que se pretende incorporar entre el actuar delictivo de los menores de edad que se encuentran en el parámetro de adolescente (entre 14 y 18 años) a quienes según tal estructura se le podría atribuir responsabilidad penal, la cual deberá sin duda alguna tener una evaluación previa de condiciones y capacidades. Ante esta condición es que surge el cuestionamiento de la investigación, es que acaso para que se logre efectivizar la estructura procesal de este código en cuestión, ¿se precisará de complementar la norma sustantiva?

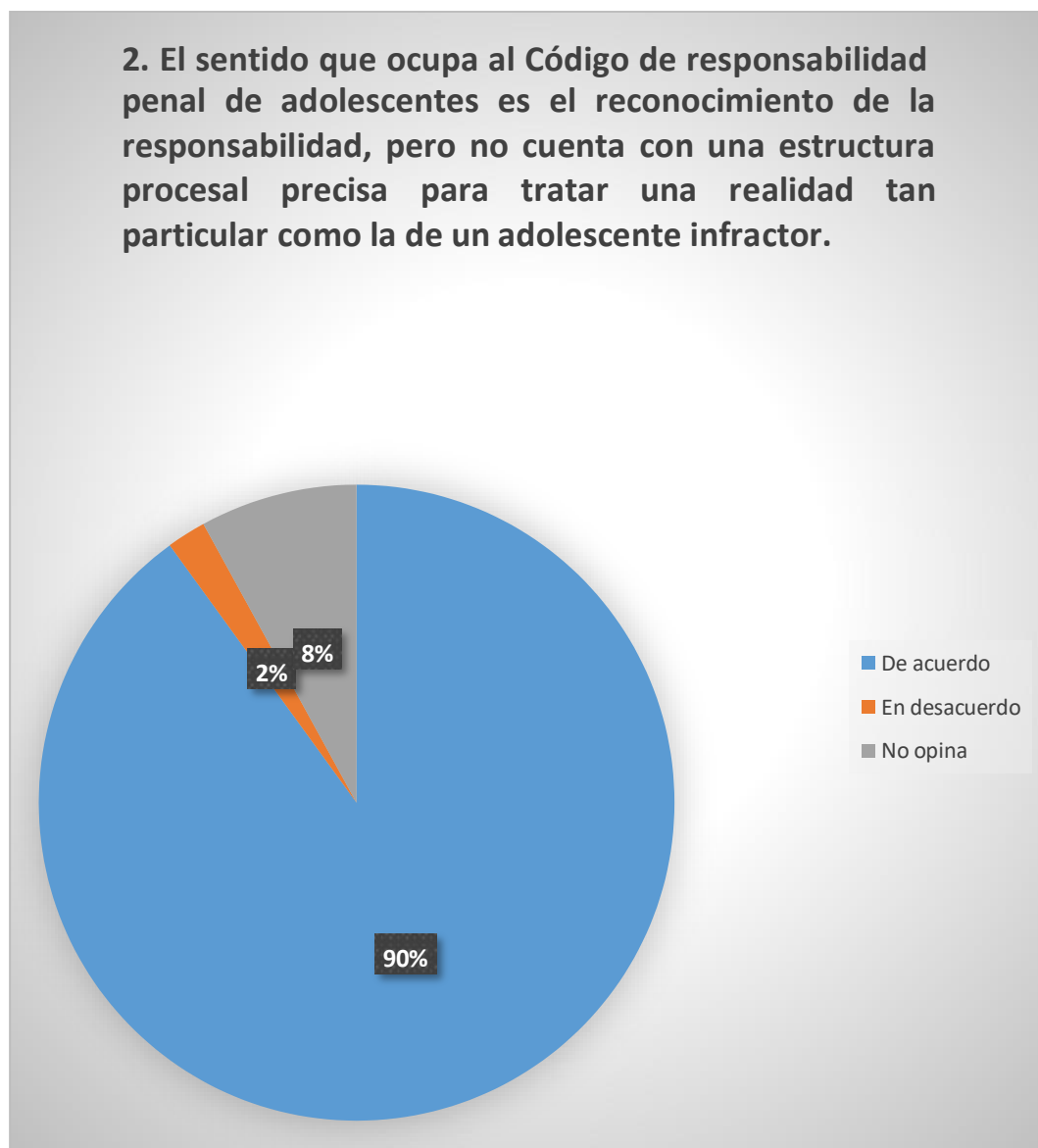


*Tabla 2: Resultados obtenidos sobre la afirmación: El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor.*

2. El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor.

Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	45
b. En desacuerdo	01
c. No opina	04
Total	50

*Ilustración 2: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor.*



#### **OBSERVACIÓN:**

Al verificar el traslado de los resultados al ámbito porcentual se aprecia un total del 90% que se encuentran en conformidad con lo sugerido en sentido crítico sobre la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de Adolescentes, el mismo que se plantea como insuficiente en sus componentes. Pero básicamente la

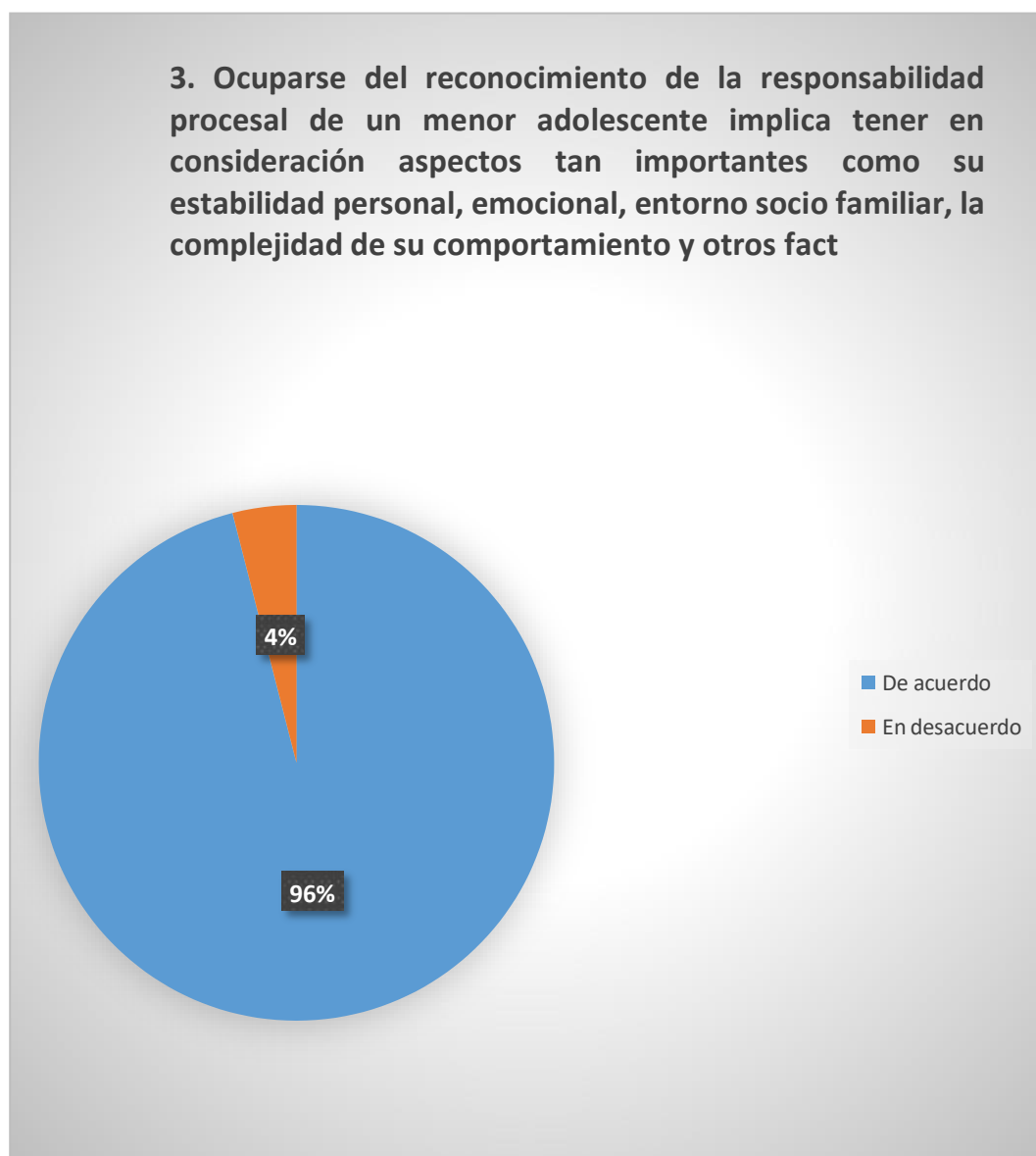
observación se proyecta a la ausencia de conexión sistemática con el ordenamiento sustantivo que se reconoce en el Código Penal, que precisamente puntualiza la condición requerida previamente para establecer el carácter de la imputación.

Esto indica que la aplicación de la estructura procesal para imputar responsabilidad sería de condición nula en tanto que no cuenta con una base adecuada que respalde tal atribución, esto implica que está condenada a la ejecución fuera del ámbito de la legalidad, ello en tanto que las circunstancias que operan sobre la inimputabilidad están marcadas en función a un límite de edad que no ha sido superado en el ámbito penal.

*Tabla 3: Resultados obtenidos sobre la afirmación: Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal aun cuando sólo se tratare de sanciones mínimas.*

3. Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad	
procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal aún cuando sólo se tratare de sanciones mínimas.	
Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	48
b. En desacuerdo	02
c. No opina	00
Total	50

*Ilustración 3: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal, aún cuando sólo se tratare de sanciones mínimas.*



#### OBSERVACIÓN:

El sentido de esta propuesta en la afirmación que se sometió al juicio de los expertos en el área jurídica, ha dado como resultado el apoyo de un 96% del total de encuestados, así pues se consolida de manera fehaciente la configuración de las políticas públicas que debieran estar orientadas a la construcción de un esquema

normativo adecuado para la protección de los menores de edad. Sobre todo este contexto proteccionista no debería limitarse a la acción del ius puniendi del Estado.

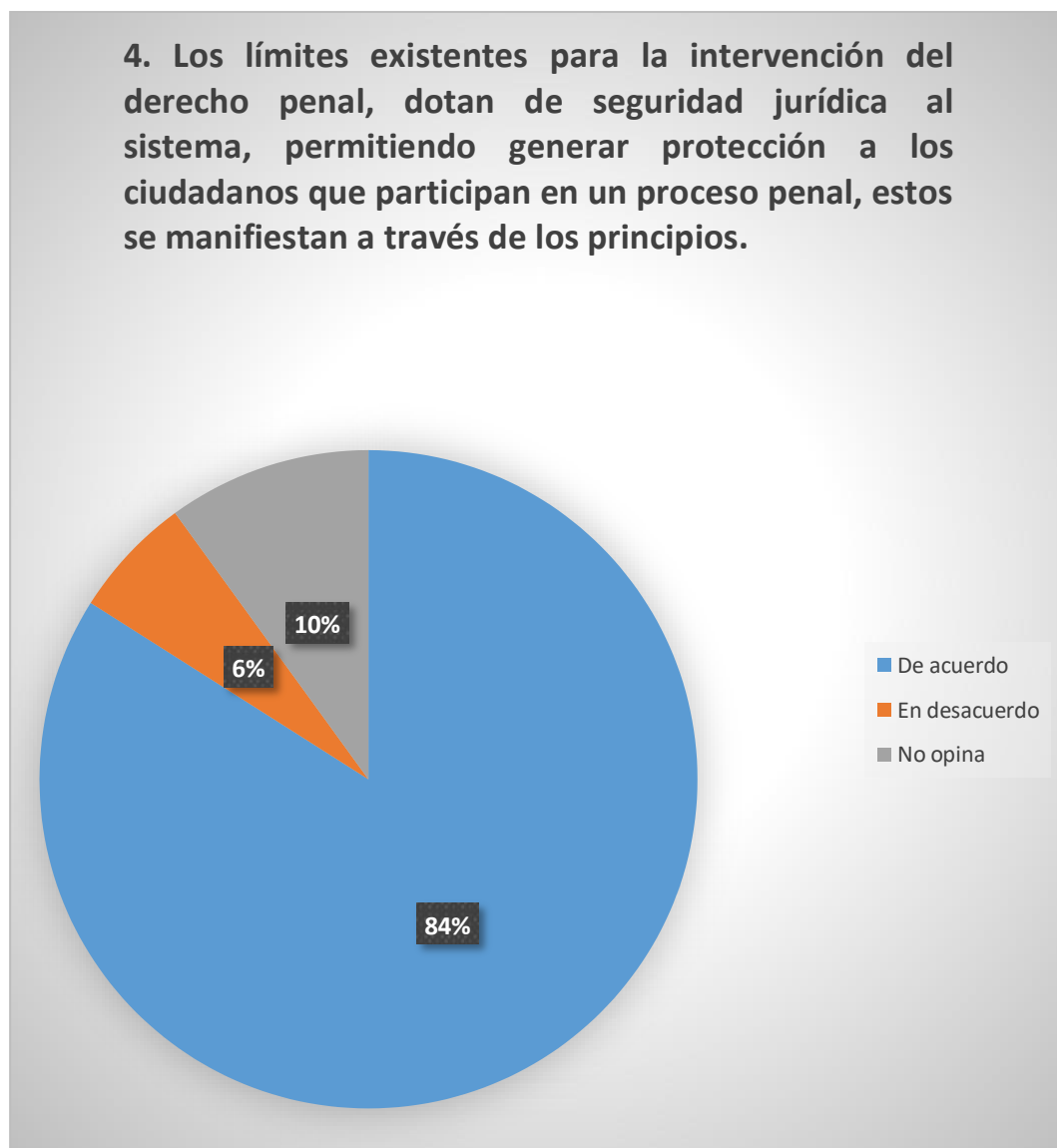
Las condiciones que marcan el contexto en que se ejecutan las acciones delictivas juveniles se muestran como elementos de contemplación criminológica, que indica factores que son de ocupación del Estado, pero que no necesariamente tienen que ver con el aspecto punitivo como único medio de solución. Se precisa por ello que la organización estatal se ocupe de la construcción de pautas de corte social, administrativo y jurídico para que se consagren los derechos de los sectores más sensibles de la población.

*Tabla 4: Resultados obtenidos sobre la afirmación: Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que participan en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios.*

4. Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que participan en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios.

Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	42
b. En desacuerdo	03
c. No opina	05
Total	50

*Ilustración 4: Porcentajes obtenidos sobre la afirmación: Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que participan en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios.*



#### **OBSERVACIÓN:**

Los resultados que se indican el resultado porcentual, alcanzan un 84% del total de los encuestados que opinan estar de acuerdo con el planteamiento referido a la condición garantista del ordenamiento jurídico penal, con especial atención del proceso penal en sí, el mismo que se cubre del manto de protección que otorgan los



principios garantistas, lo cual se ocupa de establecer lineamientos adecuados que consoliden acciones punitivas válidas para el desarrollo de una correcta imputación.

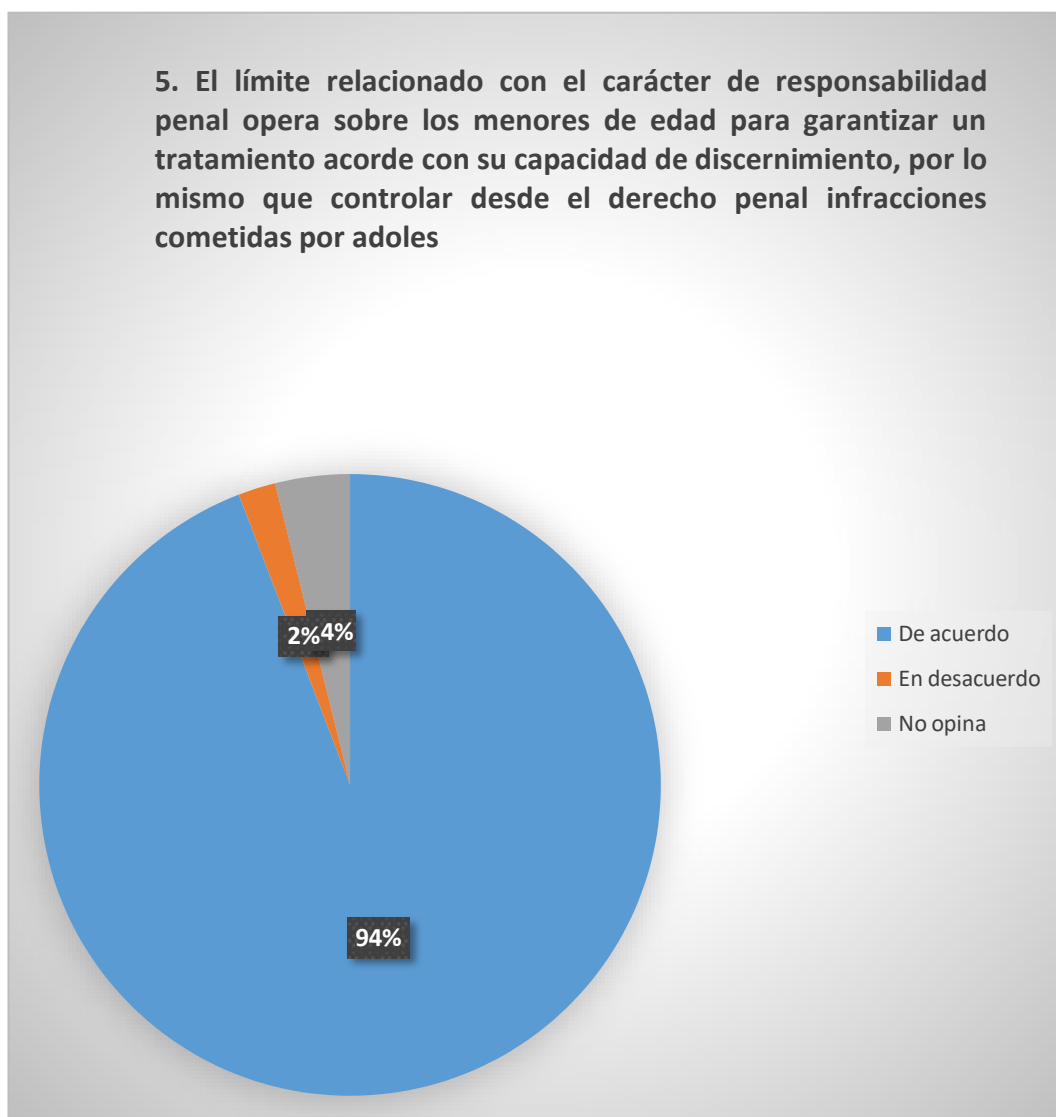
El caso de los menores de edad está contemplado como factor de preocupación estatal para asegurar su protección, ello se encuentra reflejado en la pauta normativa que diseña el ordenamiento penal sustantivo, lo cual orienta a la limitación del efecto punitivo del Estado sobre los sujetos que no alcanzan la edad de 18 años.

*Tabla 5: Resultados obtenidos de la afirmación: El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción.*

5. El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción.

Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	47
b. En desacuerdo	01
c. No opina	02
Total	50

*Ilustración 5: Porcentajes obtenidos de la afirmación: El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción.*



#### **OBSERVACIÓN:**

Las condiciones planteadas en la afirmación relacionadas con las garantías penales que aseguran la inimputabilidad de los menores de edad, ha tenido como resultado una apreciación favorable por parte de los expertos en derecho, alcanzando un 94% del total de los encuestados, es así que se concreta un efecto de protección

de la seguridad jurídica que implica la restricción del ius puniendi del Estado frente a la acción delictiva.

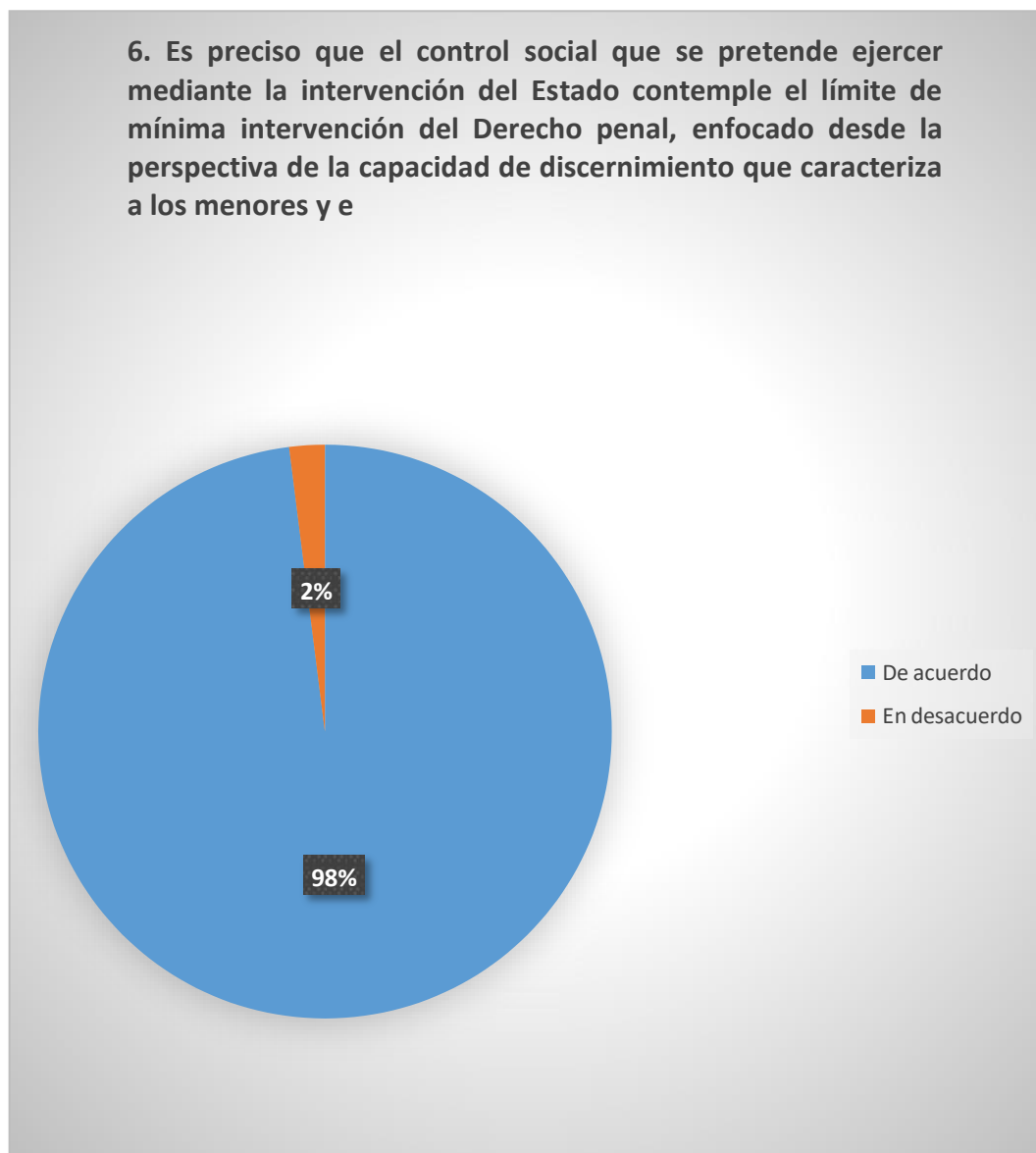
El caso especial de los menores de edad conduce a la observación de una realidad social que los envuelve, algunos casos apreciados en la realidad consolidan cuestiones de orden estrictamente personal, en tanto que la familia resulta influenciando sobre la conducta de los menores de edad, así también otros elementos en el ámbito social confluyen para generar injerencia sobre el actuar de los menores. Estos aspectos serán de necesaria atención, en tanto que el nivel de discernimiento aún no se ha completado.

*Tabla 6: Resultados obtenidos de la afirmación: Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos.*

6. Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos.

Opciones de respuesta	Cantidad de respuestas
a. De acuerdo	49
b. En desacuerdo	01
c. No opina	00
Total	50

*Ilustración 6: Porcentajes obtenidos de la afirmación: Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos.*



#### **OBSERVACIÓN:**

Según lo que se aprecia del conteo porcentual del resultado, existe un total de 98% de encuestados que han alcanzado su opinión favorable sobre la afirmación que señala la propuesta de esta investigación. Se proyecta sobre ello una condición de

carácter proteccionista, esto es que la función estatal deberá someter a juicio la condición de incapacidad que opera jurídicamente sobre estos menores aún cuando estén en la etapa de la adolescencia, puesto que aún su discernimiento es relativo e incluso más vulnerable de coacción.

Es por tal motivo que sobre esta capacidad de discernimiento se debe enfocar la acción estatal para concretar un detalle de protección adecuada, seguridad jurídica y sobre todo la efectividad del control social que se supone ha de ser diseñado con la finalidad de establecer un lineamiento de garantía adecuado.

## 4.2. Discusión de los resultados

### 4.2.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Estudiar la estructura del Código de Responsabilidad penal de adolescentes en razón de los principios garantistas”.

La discusión que se genera en torno a este objetivo específico estará enfocada hacia los **resultados obtenidos** de la teoría respecto a los principios garantistas y su contrastación con su recojo en la estructura del Código de responsabilidad penal de adolescentes, a fin de poder establecer en primer término **si resulta adecuada** ésta protección que se supone asiste también a los menores de edad.

En ese sentido del análisis de la estructura del Código de responsabilidad penal de adolescentes se ha podido apreciar que existe en detalle la **descripción de las garantías que asisten al proceso penal común**, recogidas en la motivación de esta nueva regulación con carácter de especial para atender la responsabilidad particular de los menores de edad comprendidos como adolescentes.

Este control que permite verificar si el reconocimiento de los derechos resulta lo suficientemente adecuado a la realidad del tratamiento de los menores de edad, pasa por el filtro de la crítica respecto a la conservación de las líneas de acción propuestas por la Convención de los derechos del niño, en la que se concentran circunstancias de tratamiento especial.

Dentro de las condiciones que se reconoce de dicho tratamiento, además de los principios garantistas, se asume como principio más preponderante el que se le



conoce como el interés superior del niño, siendo así la convencionalidad ataca directamente a la estructura de toda construcción legal que se ocupe del tratamiento de los menores, lo cual se intensifica en tanto se trate de la imputación de los mismos por una cuestión de incursión en actos considerados como delictivos.

La sanción, según el ordenamiento jurídico ha de comprenderse como la respuesta del Estado para combatir la criminalidad a través del ius puniendi que tiene como facultad especial para sancionar, la misma que contiene límites para controlar su acción y evitar que su intervención supere otros elementos que se comportan como límites como es el caso de los principios generales del derecho penal primero y luego, los que corresponden al proceso en sí.

Partiendo de ello, corresponde entonces hacer la crítica respecto a la justificación jurídica que conduce a la creación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, desde luego las indicaciones que se plasman en el propio instrumento legal, apuntan a la necesidad de establecer el control de la acción delictiva en manos de los adolescentes, lo cual debe analizarse desde el punto de vista de la intervención de la criminología respecto a la actividad penal.

Precisamente la intervención de dicha ciencia es lo que convoca la evaluación de ciertas acciones que corresponden al Estado para accionar de manera previa a la comisión de la acción delictiva, esto refiriéndose a la función preventiva que debe recogerse en las políticas públicas que se ocupan de la lucha contra el crimen.

Esto es que la acción estatal previa implica que se tomen las medidas para frenar este tipo de acción delictiva, sopesando las condiciones y necesidades de los

adolescentes que pudieran estar empujándolos a la comisión de delitos; luego de lo cual, en tanto estas medidas no hubieran funcionado habría de ocuparse del último nivel de intervención estatal que corresponde al uso del ius puniendi.

Tal intervención requerirá de una justificación válida, la cual según lo especificado en la motivación de este nuevo cuerpo legal no resulta lo suficientemente satisfactoria, toda vez que la función del Estado no ha logrado asumir de manera completa la prevención del delito, sólo se basa en la necesidad de mantener el control a través de la represión que incorpora el derecho penal; circunstancia totalmente evidente ya que la nomenclatura del cuerpo legal en cuestión habla de “responsabilidad penal de adolescentes”; por lo que se cuestiona la necesidad de su incorporación.

¿Qué tan adecuada se encuentra la justificación para crear el Código de Responsabilidad penal de Adolescentes con los principios del ordenamiento jurídico?

Se presume que la actividad estatal en función de la teoría del control social, debiera mantener un seguimiento de las condiciones sociales en las que se desarrollan las conductas, a fin de adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de la legalidad que supone una acción que espera tener resultados sobre todo lo relacionado con la prevención de la delincuencia juvenil. Sin duda alguna este sería el fundamento que justifica la intervención estatal bajo el parámetro que pretende establecer un lineamiento de control a la espera de un efecto controlador del índice delincuencial, lo cual no se aprecia desde una perspectiva óptima.

Es decir que con todo lo establecido como nuevos lineamientos de acción estatal, conviene realizar un tratamiento más consolidado hacia la prevención, puesto que la ejecución jurisdiccional no resulta lo suficientemente efectiva, y es que la función de este ámbito que corresponde al derecho penal, no se consolida como una acción de prevención, sino más bien de reproche, siendo una suerte de castigo sobre el sujeto que ha cometido la acción ilícita.

En tal sentido la acción estatal se puede reconocer desde un ámbito de garantía social, pero lo que no se aprecia es algún tipo de resultado apropiado en relación al control social que se supone ejercería el Estado, trayendo como respuesta al cuestionamiento, que en efecto el fundamento justificante de esta intervención resulta jurídicamente válido, pero hace falta un seguimiento más adecuado que permita establecer los verdaderos factores que habrían de atacar el sistema de justicia, esto es que las acciones deben enfocarse a la prevención mas no a la sanción, puesto que la incorporación de este ordenamiento en sistema de justicia implica extralimitación de la acción afectando las garantías constitucionales vinculadas con el límite punitivo respecto a los menores de edad.

#### TOMA DE POSTURA:

De acuerdo al análisis de la investigación respecto a la estructura del Código bajo estudio, se puede reconocer un impulso estatal para establecer control sobre el índice de crecimiento respecto a la delincuencia juvenil, ello como indicador que permite sugerir la creación de un sistema de intervención estatal, el mismo que está proyectado sobre el aspecto estadístico mas no sobre la evaluación criminológica de la realidad, puesto que la principal característica de la imputación es que restringe

derechos fundamentales y estando estos garantizados por los principios generales mantienen un efecto de control sobre este tipo de limitaciones.

**4.2.2. Discusión sobre el objetivo específico: “Describir las justificaciones jurídicas válidas para el establecimiento del límite de responsabilidad penal de los menores y los vicios que generan su vulneración”.**

Tal cual se ha señalado anteriormente, existen límites a la intervención estatal que se configuran en función de las condiciones garantistas que supone el control de parte de los principios, los mismos que consolidan las garantías en el ordenamiento jurídico, vale decir que estas condiciones son las que restringen el control estatal. Desde luego tales condicionamientos tienen pautas de restricción lo suficientemente delimitadas para que se establezca un fin de seguridad jurídica; por lo mismo que se debe cuestionar ¿qué tan apropiado es el control de los principios generales del derecho sobre la creación de las reglas jurídicas?

Cabe indicar que el sentido de control supone también límites destinados a la protección de los derechos de las personas que puedan verse vinculadas en el desarrollo de una investigación penal, pero son pautas que establecen fines de equilibrio entre el poder del Estado como acción controladora y el propio poder de los ciudadanos que en función a las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico bien pueden conseguir una suerte de impunidad.

¿Qué fundamentos justifican la restricción de la acción punitiva estatal? Son diversas las condiciones que se presentan como justificantes de los límites punitivos para solventar el interés particular de quienes son perseguidos por el ius puniendi

estatal; es así que con el fin de asegurar las garantías constitucionales, se plantean fundamentos restrictivos como son las condiciones relacionadas con la capacidad de los sujetos, entre los que se ubica a la edad como un límite vinculado al nivel de percepción de la realidad que pueda tener el sujeto de acuerdo a la evolución de su madurez, esto se plasma tanto en razón de una cuestión previa a la madurez así como un momento posterior a ella.

La primera es la que condiciona la restricción de la acción punitiva en función a la edad inferior a la mayoría de edad, entre tanto que la segunda se manifiesta en razón de los sujetos que por su mayoría de edad estarían en una condición de vulnerabilidad dada la pérdida del raciocinio y hasta el juicio en función de factores relacionados con la ancianidad. Como se puede apreciar la vinculación con los hechos delictivos que conllevarían a la atribución de la responsabilidad penal por un hecho ilícito, no se completa totalmente en función a los límites o restricciones ya explicados.

Otra justificación jurídica válida que se reconoce para la aplicación de límites al ius puniendi, está precisamente enfocada en la propia atribución de responsabilidad penal, que para que surta su efecto como tal requiere de la participación motivada de un sujeto en el desarrollo ilícito, lo cual no se puede consolidar de manera completa por parte de un menor de edad o de un anciano, esto es que no podrá demostrarse objetivamente su convicción volitiva en el momento de la ejecución del hecho, pues dadas sus condiciones de percepción existe la posibilidad de la manipulación o extorsión para ejecutar dichos actos.

Lo señalado disminuye notablemente la vinculación entre el hecho delictivo y el sujeto, por lo que la condición subjetiva que estimula la comisión del hecho

delictivo no se encontraría presente, o cuando menos resulta poco probable o demostrable, por lo mismo que la objetividad de la imputación no se lograría a cabalidad, debido a ello es que la acción punitiva se limita. Es en función a tal razonamiento que se puede indicar que la intención de atribuir responsabilidad penal a los menores adolescentes carece de un fundamento jurídico lo suficientemente válido que permita anular los límites existentes en el ordenamiento jurídico penal y constitucional para evitar que dichos sujetos sean sancionados de forma regular. Vale decir que no coincide el razonamiento punitivo con el raciocinio del sujeto imputado en función a sus capacidades limitadas.

En tal sentido se aprecia una condición particular que representa un vicio o falla en el esquema punitivo, esto es que la aplicación del objeto punitivo que representa el Código de responsabilidad penal de adolescentes, constituiría un error en el razonamiento jurídico penal, debido a la convergencia de principios y garantías que amparan a estos sujetos, por la estructura punitiva que establece un límite de edad para ejecutar acciones penales.

#### TOMA DE POSTURA:

En torno a lo desarrollado sobre la responsabilidad penal como tal, se ha logrado reconocer que se precisa de un razonamiento puntual que permita al sistema de justicia atribuir responsabilidad penal a un sujeto en función a determinado hecho delictivo, que se orienta hacia la capacidad y voluntad de ejercer dicha acción, por lo mismo que atendiendo a las condiciones garantistas y la propia estructura de los límites punitivos en el ordenamiento jurídico, resulta sin justificación jurídica válida la imputación de dicha responsabilidad penal a tales sujetos, constituyéndose tal acción en un vicio procesal en tanto que carece de cumplimiento de la base sustantiva

que limita la acción punitiva del estado en función a la edad del sujeto involucrado en el ilícito penal.

**4.2.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Evaluar los efectos de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes respecto del control social de la delincuencia juvenil”.**

Diseñado el análisis de esta investigación, se ha tomado en cuenta la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, por lo mismo que debe cuestionarse ¿qué críticas puede hacerse al desarrollo procesal diseñado en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes?, esta condición de estructura presuntamente especial en su diseño para atender de manera jurídicamente cabal a la condición de los menores, no resulta ser más que un traslado del esquema del proceso común que se ejecuta para el desarrollo de las investigaciones de sujetos que se encuentran en plena capacidad de raciocinio y madurez.

En virtud a ello se puede establecer que la circunstancia crítica que existe sobre la estructura procesal del código adjetivo común se traslada de manera directa sobre este nuevo esquema jurídico que busca sancionar penalmente a los menores de edad en función a su responsabilidad. Las condiciones de punición deben entenderse en función a las atribuciones vinculadas con el razonamiento jurisdiccional, esto es a la asunción de criterios de certeza sobre la comisión del hecho delictivo vinculado con el sujeto activo, si es cierto, pero sin dejar de atender los límites existentes en el propio ordenamiento jurídico.

Otro de los cuestionamientos que se ponen en tela de juicio es ¿la creación de un título vinculado con la responsabilidad penal atribuible a los adolescentes se basa en el principio de igualdad ante la ley?, de acuerdo a ello más bien podría sugerirse una extralimitación que ataca el sentido de la igualdad, puesto que debe señalarse que la existencia del principio de igualdad no se puede suponer de manera absoluta para que las reglas se apliquen de manera general sobre todos los sujetos de derecho.

Más bien cabe señalar que la aplicación de este principio supone la existencia de una condición previa para establecer la igualdad como tal, esto es que el grupo de sujetos a los que se aplica una determinada ley deben tener las mismas características y condiciones, es en función a ello que se reconoce la existencia de diferenciación sobre la capacidad de razonamiento y madurez enfocada como justificante del límite al ius puniendi. Esto implica a razonar un sentido de igualdad entre los menores de edad que aún no alcanzaron el juicio suficiente para poder asumir el control de sus actos y voluntad al momento de cometer un acto ilícito.

Sin duda alguna esta condición particular del menor es lo que genera diferenciación con los sujetos que alcanzando la mayoría de edad, llegan al nivel de raciocinio necesario para dilucidar entre lo lícito y lo que no resulta ser así. Es precisamente esta distinción lo que saca de la discusión al principio de la igualdad ante la ley como amparo para aplicar responsabilidad penal a todos los ciudadanos sin distinción de edad.

Entonces lo que se supone ha gestado la creación de esta nominación del código en cuestión es la verificación de una necesidad de ejercer control, por lo mismo que resulta apropiado cuestionar ¿qué tan justificado y eficaz resulta el control social ejercido por el Estado sobre la delincuencia juvenil?.



Sobre este aspecto se ha verificado ampliamente el requerimiento previo de mostrar o reconocer eficazmente la existencia de una necesidad social, importante sobre ello establecer los factores que se puedan identificar como generadores del problema social que se observa. Para el caso de la delincuencia juvenil, el análisis que realiza el Estado aparentemente sólo estaría basado en los niveles de incidencia delincuencial en el ámbito juvenil; situación que muestra una necesidad de intervención, pero no identifica los factores que estarían provocando tal situación.

La condición de ejercer control social es precisamente mantener el respeto por los lineamientos garantistas constitucionales, que limitan sin duda alguna el ejercicio de poder que realiza el Estado, ello con la intención de evitar las arbitrariedades en el manejo de acciones que se consoliden como detonante de creación de reglas orientadas a la restricción de derechos con el fin de ejercer coacción. De hecho, la función penal es la de sancionar, pero esta condición punitiva también tiene límites que deben ser atendidos y evaluados de manera previa a cualquier ejercicio de creación legislativa.

Como tal se ha indicado, el Estado deberá ejercer control social basándose en el reconocimiento de factores que provocan el problema social, que para el caso de la delincuencia juvenil se ha trasladado de manera directa la acción de control hacia la herramienta última en el catálogo de opciones como es el derecho penal al cual le asisten límites de acción como la última ratio y de la mínima intervención. Esta condición es la que supera la viabilidad del ejercicio procesal de este código bajo comentario.

#### TOMA DE POSTURA:

Según la evaluación realizada, sobre las condiciones en las que se presenta este cuerpo legal materia de análisis, se aprecia que no satisface lineamientos especiales para la atención también particular de los menores adolescentes, puesto que no se consolida procesalmente válido en tanto que atribuir responsabilidad penal a un menor procesalmente, requiere de un respaldo de la regla sustantiva, la cual se mantiene de manera puntual sobre el límite en función a la capacidad incompleta del menor de edad, por lo mismo que el control social que se ha pretendido ejercer por parte del Estado sobre la delincuencia juvenil no resulta lo suficientemente satisfactorio, pues carece de acciones previas a la intervención punitiva, que bien podrían resolver el problema social.

#### **4.2.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar la necesidad de establecer una propuesta modificatoria de la estructura del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de alcanzar un correcto control social de la delincuencia juvenil”.**

De acuerdo a la estructura normativa que existe en el Perú relacionada con la protección de los menores se advierte un grupo orientado a la garantía de su bienestar integral, pero bajo la característica de acciones ex post, lo cual sin duda es característica del Derecho Penal, en tanto que se precisa que se haya producido la acción ilícita para que se active la persecución del Estado y en virtud de ello se pueda evaluar el nivel de afectación y la posibilidad de atribuir responsabilidad en tanto que se pueda aplicar una sanción.

El caso de los menores en este ámbito del Derecho Penal se condiciona al nivel de capacidad jurídica, fisiológica y psicológica que conlleven a un tratamiento especial en tanto se produzca el conflicto entre sus actos y la normativa vigente. Precisamente por ello es que se aprecia la acción estatal mediante el D. L. N° 1348 que incorpora al ordenamiento jurídico el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes bajo el objeto justificante de ser una acción necesaria por la inexistencia de reglas especiales sobre el tema.

Ante ello es importante señalar que en el ordenamiento jurídico ha existido la orientación protectora sobre los menores que se encuentran en conflicto con la ley debido a sus acciones particulares, lo cual se advirtió de la construcción del Código de los niños y adolescentes aprobado por la Ley N° 27337 desde el mes de agosto del año 2000, que se encuentra vigente a la actualidad con las modificaciones que resultan como efecto de la aplicación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Tal modificación se refiere a la derogación de los artículos correspondientes a la estructura del capítulo III que se ocupaba del adolescente infractor de la Ley Penal a partir del artículo 183 del Código de los Niños y Adolescentes, además del Capítulo IV sobre pandillaje pernicioso, el Capítulo V sobre investigación y juzgamiento, el Capítulo VI sobre Remisión del Proceso, el Capítulo VII sobre sanciones a adolescentes infractores de la ley penal, Capítulo VII-A sobre ejecución de las sanciones.

Tal cual se puede apreciar la participación normativa del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes suple las acciones del Código de Niños y Adolescentes que se encuentra aún vigente en los ámbitos que corresponden a la

protección del menor de edad. Esto conlleva al razonamiento de que la necesidad observada como objeto de esta nueva regla vigente desde el año 2017 se orienta hacia la atribución de responsabilidad penal de este grupo de menores que como lo señala en su artículo primero se trataría de una responsabilidad penal especial.

Es criticable jurídicamente dicha percepción, en tanto que las reglas de acuerdo a su ámbito han de tener su configuración en razón de las fuentes, para el caso de la aplicación de esta regla se percibe como procesalmente inadecuada en tanto que para la imputación de responsabilidad penal deberá asumirse como el desprendimiento de la regla general. Para este caso tal regla de carácter general y sustantivo será el Código Penal en el cual se contempla la base de la imputación, esta herramienta jurídica consigna la imputación de los delitos en función de la atribución de la responsabilidad penal, estableciendo límites para la acción punitiva del Estado.

Las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico respecto a la imputación se encuentran en el segundo título sobre el hecho punible donde se ubica el capítulo tercero referido a las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, precisamente en el artículo veinte, en cuyo inciso segundo indica que se encuentra exento de responsabilidad penal el menor de 18 años. Esta pauta condiciona un sentido incongruente en el resto de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en tanto que no sería posible atribuir responsabilidad penal a los menores aun cuando se tratase de una responsabilidad penal especial para el caso de los menores comprendidos entre 14 y 18 años.

La condición especial de la responsabilidad penal tal cual lo señala el objeto del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, tendría que estar refrendada por el elemento base que representa el Código Penal sustantivo, lo que se implica la

indicación especial de este carácter, ello en tanto que incluso la responsabilidad atenuada se encuentra contemplada de manera taxativa en el ordenamiento jurídico penal pues el artículo veintiuno del código así lo establece, además del artículo veintitrés que señala la condición especial de restricción de la responsabilidad penal en función a la edad del sujeto.

Como se puede apreciar la configuración sustantiva tiene especificación puntual respecto a condiciones especiales referidas a la responsabilidad penal, elemento que constituye el objeto del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que como ya se ha dicho antes requiere de una base sustantiva que oriente o cimiente la estructura procesal. Dicha estructura tendrá un comportamiento de inestabilidad ante la ausencia de condición especial de responsabilidad penal que debe ser establecida adecuadamente.

Par los efectos adecuados que debe tomar la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se tendrá en cuenta de manera previa la necesidad de establecer una modificación en el ordenamiento sustantivo que señale como inimputables a los menores de 14 de años. Sólo con esta modificación se evitará la incongruencia procesal que desvirtúa la legalidad de su ejecución, consolidando así un esquema idóneo para la aplicación de acciones en la búsqueda del control social de la delincuencia juvenil.

#### TOMA DE POSTURA:

En función al análisis de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, se aprecia que esta construcción adolece de un problema de naturaleza sistemática ello en tanto que su aspecto procesal debe depender de bases

sustantivas que respalden su ejecución, lo cual se verifica en la incongruencia de su artículo segundo referido a la responsabilidad especial para menores entre 14 y 18 años, que no se encuentra contemplado de manera taxativa en el ordenamiento jurídico penal sustantivo, dado que el artículo 20 considera inimputables penalmente a los menores de 18 años.

## **CONCLUSIONES**

### **Conclusión general**

Se ha logrado determinar que la estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes carece de justificaciones jurídicas para su viabilidad, así como respecto a la eficacia de control social; por lo que se evidencia en su aplicación efectos de vulneración sobre el límite de responsabilidad penal de los menores.

### **Conclusiones específicas**

#### **Primera:**

Se ha logrado establecer en base al estudio de la estructura del Código de Responsabilidad penal de adolescentes en razón de los principios garantistas, que se puede reconocer un impulso estatal para establecer control sobre el índice de crecimiento respecto a la delincuencia juvenil, ello como indicador que permite sugerir la creación de un sistema de intervención estatal, el mismo que está proyectado sobre el aspecto estadístico mas no sobre la evaluación criminológica de la realidad, puesto que la principal característica de la imputación es que restringe derechos fundamentales y estos derechos al ser garantizados por los principios generales del derecho, mantienen un efecto de control sobre este tipo de limitaciones.

#### **Segunda:**

Se concluye de acuerdo a la descripción de las justificaciones jurídicas válidas para el establecimiento del límite de responsabilidad penal de los menores, que, se precisa de un razonamiento puntual que permita al sistema de justicia atribuir

responsabilidad penal a un sujeto en función a determinado hecho delictivo, que se orienta hacia la capacidad y voluntad de ejercer dicha acción, por lo mismo que atendiendo a las condiciones garantistas y la propia estructura de los límites punitivos en el ordenamiento jurídico, resulta sin justificación jurídica válida la imputación de dicha responsabilidad penal a tales sujetos, constituyéndose tal acción en un vicio procesal en tanto que carece de cumplimiento de la base sustantiva que limita la acción punitiva del Estado en función a la edad del sujeto involucrado en el ilícito penal.

**Tercera:**

Se concluye sobre los efectos de la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes respecto del control social de la delincuencia juvenil, que este cuerpo legal materia de análisis, no satisface lineamientos especiales para la atención también particular en condiciones de los menores adolescentes, puesto que no se consolida procesalmente válido en tanto que atribuir responsabilidad penal a un menor procesalmente, requiere de un respaldo de la regla sustantiva, la cual se mantiene de manera puntual sobre el límite en función a la capacidad incompleta del menor de edad, por lo mismo que el control social que se ha pretendido ejercer por parte del Estado sobre la delincuencia juvenil no resulta lo suficientemente satisfactorio, al carecer de acciones previas a la intervención punitiva, que bien podrían resolver el problema social.

**Cuarta:**

Se ha determinado luego de análisis sobre la necesidad de establecer una propuesta modificatoria de la estructura del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de alcanzar un correcto control social de la delincuencia juvenil.



Esta construcción adolece de un problema de naturaleza sistemática ello en tanto que su aspecto procesal debe depender de bases sustantivas que respalden su ejecución, lo cual se verifica en la incongruencia de su artículo segundo referido a la responsabilidad especial para menores entre 14 y 18 años, que no se encuentra contemplado de manera taxativa en el ordenamiento jurídico penal sustantivo, dado que el artículo 20 considera inimputables penalmente a los menores de 18 años.

## RECOMENDACIONES

### **Primera:**

Se recomienda al Estado peruano se ocupe de la revisión adecuada de las políticas públicas destinadas al control social de la delincuencia juvenil, ello en tanto que la estructura procesal que se ha creado en el ordenamiento jurídico para combatir la lucha contra este flagelo mediante el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, no resulta lo suficientemente apropiada en tanto que se consolida como una incongruencia sistemática con el artículo 20 del Código Penal.

### **Segunda:**

Se sugiere la modificación del artículo 20 del Código Penal, a fin de dotar de congruencia sistemática a la estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo cual deberá hacerse con la indicación de responsabilidad especial para los menores entre 14 y 18 años, y podría diseñarse de la siguiente manera:

Está exento de responsabilidad penal:

(...)

El menor de 18 años (*salvo que teniendo entre 14 y 18 años haya incurrido en acciones delictivas*)

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abadías, A. (2021). *Delincuencia juvenil. Temas para su estudio* (primera ed.). (U. I. UNIR, Ed.) Coruña, España: Colex. Obtenido de <https://www.marcialpons.es/media/pdf/delincuenciajuvenil.pdf>
- Alburquerque Vélchez, J. (2017). *Análisis de las medidas socioeducativas impuestas a adolescentes infractores previstas en el nuevo Código De Responsabilidad Juvenil*. Piura: Universidad de Piura. Obtenido de Análisis de las medidas socioeducativas impuestas a adolescentes infractores previstas en el nuevo Código De Responsabilidad Juvenil
- ARAGONESES ALONSO, P. (1997). *Proceso y Derecho Procesal: Introducción*. Madrid: EDERSA.
- Barboza Castillo, G. (2005). Principio de legalidad y proceso penal. *Derecho Penal y Criminología*, XXVI(78), 109-124. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5312306.pdf>
- Bramont Arias, L. (1992). Los principios rectores del nuevo código penal: título preliminar. *Derecho PUCP*(46), 13-31. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/6173>
- CARBONELL, M., DE CABO, A., & PISARELLO, G. (2006). *Sobre los derechos fundamentales y sus garantías. Traducción al español del libro de LUIGI FERRAJOLI*. Mexico: CNDH.
- Ccopa, F., Fuster, D., Rivera, K., Pejerrey, Y., & Tupac Yupanqui, M. (Julio-diciembre de 2020). Factores de la delincuencia juvenil en el Perú desde el

enfoque preventivo. *Eleuthera*, XXII(2), 149-169.  
doi:10.17151/elev.2020.22.2.10

Chávez Ramos, R. M., Salas Jara, S. S., & Hanco Mamani, Y. D. (2017). *La Oralidad Dentro del Juicio Oral en el Proceso de Responsabilidad Penal de Adolescentes: Análisis Comparado de las Legislaciones de Perú, Costa Rica y Uruguay*. Arequipa: Universidad Tecnológica del Perú. Obtenido de [http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/739/6/Ruth%20Chavez\\_Sara%20Salas\\_Yulmer%20Hanco\\_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional\\_T%C3%ADtulo%20Profesional\\_2017.pdf](http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/739/6/Ruth%20Chavez_Sara%20Salas_Yulmer%20Hanco_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_T%C3%ADtulo%20Profesional_2017.pdf)

Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. (2017). *Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de <https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Codigo-de-responsabilidad-penal-de-adolescentes-2da-Edicion.pdf>

Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.

Diario Gestión. (23 de Junio de 2019). Denuncias ante la Policía Nacional repuntaron en 28% entre enero y marzo de 2019. *Diario Gestión*. Obtenido de <https://gestion.pe/peru/denuncias-policia-nacional-repuntaron-28-enero-marzo-2019-271046-noticia/>

Escalona, Y., Rodriguez, G., Vilaplana, M., & Rodriguez, Y. (2021). Delincuencia juvenil, un análisis desde el contexto familiar y comunitario.

FERRAJOLI, L. (1995). *Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal*. Madrid: Trotta.

GARCÍA CAVERO , P. (2012). *"Derecho Penal- Parte General"* (2° ed.). Lima:  
Jurista Editores E.I.R.L.

GARCÍA PABLOS DE MOLINA, A. (2012). *Introducción al Derecho Penal:  
Instituciones, fundamentos y tendencias del Derecho Penal*. Madrid:  
Editorial Universitaria Ramón Areces.

Garcia, J. (2017). *La eficacia del derecho penal como control social. Un análisis  
desde la teoría garantista del Estado constitucional de Luigi Ferrajoli*.  
Santiago de Cali: Universidad autónoma de occidente. Obtenido de  
[https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/9510/T07180.pdf;sequence  
=1](https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/9510/T07180.pdf;sequence=1)

Geisse, F., & Echevarría, G. (2003). Límites para la responsabilidad penal de los  
adolescentes. *Revista de Derecho*, XV, 99-124. Obtenido de  
<http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v14/art06.pdf>

Hernández R, Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la  
investigación* (Sexta ed.). México., México D.F., México: McGraw-Hill.

Negrón, N., & Serrano, I. (2016). Prevención de delincuencia juvenil: ¿que deben  
tener los programas para que sean efectivos? *Interamerican Journal of  
Psychology*, L(1), 117-127.  
doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28446021013>

Roca Mendoza, O. G. (2015). La capacidad de las personas naturlaes: Análisis del  
Código Civil a la luz de la Ley General de Discapacidad: Cambio de visión  
del Derecho Civil por los Derechos Humanos. *Persona y familia*, I(4), 113-  
137. Obtenido de

<http://revistas.unife.edu.pe/index.php/personayfamilia/article/view/450/25>

8

ROXIN, C. (1997). *"Derecho Penal - Parte General"* (2° ed.). (D. M. LUZÓN PEÑA , M. D. GARCÍA CONLLEDO, & J. DE VICENTE REMESAL , Trads.) Madrid : CIVITAS S.A.

Saenz, J. (2020). El derecho penal y el control social. 1-5. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d976318f3aafd38aJmltdHM9MTY2Nzg2NTYwMCZpZ3VpZD0zZDI4NWM0Yy01ODJkLTYyNDgtMjNiYS01MjAwNTkzOTYzMTQmaW5zaWQ9NTE2NA&ptn=3&hsh=3&fclid=3d285c4c-582d-6248-23ba-520059396314&psq=el+control+social+derecho+penal+definici%c3%b3n+revist>

Salcedo, J. (2016). El control social desde una visión histórica: Aproximación a la historia de las instituciones de control social en Occidente". *Revista Policía y Seguridad Pública*, VI(1), 387-406. Obtenido de [https://www.researchgate.net/publication/304669748\\_Web\\_El\\_control\\_social\\_desde\\_una\\_vision\\_historica\\_Aproximacion\\_a\\_la\\_historia\\_de\\_las\\_instituciones\\_de\\_control\\_social\\_en\\_Occidente](https://www.researchgate.net/publication/304669748_Web_El_control_social_desde_una_vision_historica_Aproximacion_a_la_historia_de_las_instituciones_de_control_social_en_Occidente)

Suarez Hernández, S. (2015). *"Imputabilidad y Responsabilidad Penal de los Adolescentes"- Una aporximación a su tratamiento en Colombia y en el derecho comparado*. Tesis para obtener el título de Abogada, Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano , Bogotá. Obtenido de <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/01/doctrina44795.pdf>

- Toro, C. (2019). Entre el orden, el vínculo, el conflicto y el poder. Aproximación histórica al concepto de control social y análisis de sus usos historiográficos. *Trashumante. Revista Americana de Historia Social*, 174-194. Obtenido de <https://www.bing.com/ck/a?!&p=206692dc9879bac2JmltdHM9MTY2Nzg2NTYwMCZpZ3VpZD0zZDI4NWM0Yy01ODJkLTlyNDgtMjNiYS01MjAwNTkzOTYzMTQmaW5zaWQ9NTI1NA&p=3&hsh=3&fclid=3d285c4c-582d-6248-23ba-520059396314&psq=el+control+social+definici% c3% b3n+revista+pdf&u=a1aHR0>
- Varsi Rospigliosi, E., & Torres Maldonado, M. A. (2019). El nuevo tratamiento del régimen de la capacidad en el Código Civil peruano. *Acta Bioethica*, XXV(2), 199-213. Obtenido de <https://revistas.uchile.cl/index.php/AB/article/view/55074/58061>
- VILLAVICENCIO TERREROS , F. (2009). *"Derecho Penal - Parte General"* (1° ed.). Lima: Grijley E.I.R.L.
- Villavicencio, F. (2003). Límites a la función punitiva estatal. *Derecho y Sociedad*(21), 93-116. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/17355/17641/>
- Zaffaroni, R. (1989). *En busca de las penas perdidas*. Buenos Aires: Ediar.

## ANEXOS

*Anexo 1: Cuestionario de encuesta aplicada a los operadores jurídicos del Distrito Judicial de Lambayeque*

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**

**ESCUELA DE POSGRADO**



### TESIS

**La estructura procesal del Código de Responsabilidad Penal de  
Adolescentes frente a la vulneración del límite de responsabilidad penal.**

#### CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Variable independiente: La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes.**

1. La estructura procesal del Código de Responsabilidad penal de adolescentes está construida en base al marco del proceso común, lo cual facilita la verificación del grado de responsable que le corresponde al menor infractor.
  - a. De acuerdo.



- b. En desacuerdo.
  - c. No opina.
- 2. El sentido que ocupa al Código de responsabilidad penal de adolescentes es el reconocimiento de la responsabilidad, pero no cuenta con una estructura procesal precisa para tratar una realidad tan particular como la de un adolescente infractor.
  - a. De acuerdo.
  - b. En desacuerdo.
  - c. No opina.
- 3. Ocuparse del reconocimiento de la responsabilidad procesal de un menor adolescente implica tener en consideración aspectos tan importantes como su estabilidad personal, emocional, entorno socio familiar, la complejidad de su comportamiento y otros factores que resultan ser limitantes a la intervención del Derecho Penal aún cuando sólo se tratara de sanciones mínimas.
  - a. De acuerdo.
  - b. En desacuerdo.
  - c. No opina.

**II. Variable dependiente: La vulneración del límite de responsabilidad penal de los menores.**

4. Los límites existentes para la intervención del derecho penal, dotan de seguridad jurídica al sistema, permitiendo generar protección a los ciudadanos que intervienen en un proceso penal, estos se manifiestan a través de los principios.
  - a. De acuerdo.
  - b. En desacuerdo.
  - c. No opina.
5. El límite relacionado con el carácter de responsabilidad penal opera sobre los menores de edad para garantizar un tratamiento acorde con su capacidad de discernimiento, por lo mismo que controlar desde el derecho penal infracciones cometidas por adolescentes implica la vulneración de tal restricción.
  - a. De acuerdo.
  - b. En desacuerdo.
  - c. No opina.
6. Es preciso que el control social que se pretende ejercer mediante la intervención del Estado contemple el límite de mínima intervención del Derecho Penal, enfocado desde la perspectiva de la capacidad de

discernimiento que caracteriza a los menores y en función a su entorno, para evitar la vulneración de sus derechos.

- a. De acuerdo.
- b. En desacuerdo.
- c. No opina.